

Desminar la tierra para sembrar el cambio.  
La labor de la Campaña Colombiana Contra Minas en la construcción de paz.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA  
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES  
CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA  
BOGOTÁ D.C.  
2018

Desminar la tierra para sembrar el cambio.  
La labor de la Campaña Colombiana Contra Minas en la construcción de paz.

MARCELA ALEJANDRA MORENO CAMARGO  
Trabajo de grado para optar por el título de Politóloga

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA  
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES  
CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA  
BOGOTÁ D.C.  
2018

Desminar la tierra para sembrar cambio.  
La labor de la Campaña Colombiana Contra Minas en la construcción de paz.

MARCELA ALEJANDRA MORENO CAMARGO  
Trabajo de grado para optar por el título de Politóloga

DIRECTORA DEL TRABAJO DE GRADO

MARÍA LUCÍA ZAPATA CANCELADO

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA  
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES  
CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA  
BOGOTÁ D.C.  
2018

## *Agradecimientos*

*En estos años he tenido la oportunidad de escuchar muchas historias que me llenaron de razones para pensarme, para descubrir mis luchas y entender desde ellas la realidad que construimos.*

*Sin duda las historias más bellas son las que desde pequeña conocí gracias al amor en mi familia. A mis papás y mis hermanitos: estaré eternamente agradecida y feliz de tenerlos como apoyo y de poder aprender cada día un poco más de ustedes.*

*A las amistades que acompañaron mi recorrido y me dieron las fuerzas para seguir adelante. Gracias Jessika por ser la compañera de incontables momentos, por caminar a mi lado, levantarme para seguir avanzando y soñar conmigo nuevos rumbos. Gracias Juan por tu eterna paciencia y comprensión, por ser el mejor apoyo en los momentos de duda.*

*Gracias a las personas de la Campaña Colombiana contra Minas por sus relatos y su incansable compromiso con la paz, solo tengo admiración por el trabajo que hacen. A Camilo por su colaboración y a las personas de Vistahermosa que me llenaron con historias de esperanza.*

*A todos los que con sus palabras me permitieron abrir los ojos a nuevas situaciones. Ustedes son la fuente del ánimo y el compromiso que me hace estar hoy con el corazón abierto a los nuevos rumbos por recorrer.*

*El desminado humanitario debe ser realmente una herramienta que permita el desarrollo y la inclusión de zonas que han estado marginadas por décadas*

- Álvaro Jiménez. Director de la Campaña  
Colombiana contra Minas

*El compromiso es de poder llevar los territorios sumergidos bajo el conflicto la posibilidad de que se reincorporen estas regiones olvidados y marginadas (...). No es solo retirar las minas de unos territorios sino descontaminar y desminar el conflicto social que hay en los territorios*

*-Humanicemos DH*

## *RESUMEN*

El uso de las minas antipersonal a lo largo del conflicto armado sembró, literalmente, la violencia en los territorios. A partir de estas se crearon límites físicos y simbólicos que trastornaron las posibilidades de acción de las personas, disminuyendo el espacio habitable y en esa medida afectando los lazos sociales y la confianza que mantiene la cohesión en las comunidades.

El reto de descontaminar el país a través del desminado humanitario no solo implica un proceso de desarme que permita aumentar las condiciones de seguridad para las personas que viven en las zonas donde las minas están enterradas. También es una oportunidad para cambiar la forma en que están configurados los territorios, recuperar dinámicas sociales que se vieron afectadas y comenzar a construir redes desde las cuales anclar los procesos y políticas de construcción de paz de la mano con las capacidades y los conocimientos que tienen las poblaciones. Este compromiso se ejemplifica desde el trabajo de la Campaña Colombiana Contra Minas.

## TABLA DE CONTENIDO

CAPÍTULO I: SOBRE LA INVESTIGACIÓN.....	1
CAPÍTULO II. EN TEORÍA.....	6
2.1 Construcción de paz.....	7
2.1.1 La perspectiva de los líderes de nivel intermedio.....	8
2.1.2 Construcción de redes.....	10
2.1.3 Construcción de confianza.....	12
2.1.4 Participación.....	14
2.2 El rol del espacio.....	16
2.2.1 Conflicto y espacio.....	18
2.2.2 Paz y espacio.....	19
CAPÍTULO III. LAS MINAS ANTIPERSONAL Y SUS EFECTOS SOCIO-ESPACIALES..	21
3.1 El uso de Minas Antipersonal en el contexto colombiano.....	22
3.2 Los efectos sociales de las minas antipersonal.....	25
3.3 Vivir a costa del riesgo.....	30
CAPÍTULO IV. DESCONTAMINANDO EL TERRITORIO, BUSCANDO LA PAZ.....	31
4.1 El panorama del desminado humanitario desde la política pública nacional.....	33
4.2 El Caso de la Campaña Colombiana Contra Minas.....	37
4.2.1 Incidencia como organización.....	39
4.2.2 La metodología de enlace comunitario.....	40
4.2.3 La institucionalización nacional de la metodología de enlace comunitario.....	43
4.2.4 Los cambios que se producen en el espacio.....	45
CAPÍTULO V. CONCLUSIONES.....	49
BIBLIOGRAFÍA.....	51

## TABLA DE ANEXOS

Anexo 1. MATRIZ DE ANÁLISIS SOCIO ESPACIAL.....	61
Anexo 2. CLASIFICACIÓN DE LOS MUNICIPIOS POR GRADO DE AFECTACIÓN.....	62
Anexo 3. ESQUEMA DE REDES DE LA CCCM .....	64
Anexo 4. CAJA DE HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN Y COORDINACIÓN TERRITORIAL DE ACCIÓN INTEGRAL CONTRA LAS MINAS.....	65
Anexo 5. ESQUEMA DE IMPACTOS EN EL ESPACIO A TRAVÉS DE LOS TRABAJOS DE DESMINADO HUMANITARIO DE LA CCCM.....	66
Anexo 6. ENTREVISTA KATHERINE OTÁLORA. (17 DE ABRIL DE 2018).....	66
Anexo 7. NOTAS DE CAMPO VISTAHERMOSA .....	71



## CAPÍTULO I: SOBRE LA INVESTIGACIÓN

A lo largo de las décadas de conflicto armado interno en Colombia, la violencia se convirtió en una directriz ineludible de la manera en que se configuraron los territorios. A través de acciones como los despliegues militares, las imposiciones de horarios de tránsito, el control sobre las expresiones y los espacios de asociación, o la referencia a los lugares desde su conexión con la muerte; la violencia generó una ruptura, unas veces abrupta y otras veces paulatina, en las concepciones de las personas sobre los lugares que habitaban, las maneras en que lo recorrían lo trabajaban y lo compartían (Oslender, 2008).

La guerra se encargó de acomodar y normalizar imaginarios inhumanos, emplazándolos en aquellos lugares donde las personas conviven cotidianamente, desgarrando los vínculos que dan sentido a la vida individual y colectiva de la gente, sus historias, sus memorias y su capacidad de actuar. Poco a poco se fueron destruyendo y reemplazando los referentes del territorio, que son también referentes de identidad, y se impusieron nuevos códigos sociales que cambiaron las formas de relación entre las personas (Osorio, 2009).

Una de las expresiones más directas de esto ha sido el uso de minas antipersonal (MAP), artefactos explosivos improvisados (AEI) y la presencia de remanentes explosivos de guerra (REG)<sup>1</sup> a lo largo y ancho del territorio nacional. Estos se han utilizado como armas de guerra, causando daños físicos y muerte sin diferenciar entre adversarios y población civil, pero, además, se convirtieron en una herramienta a través de la cual los grupos armados controlaron efectivamente el territorio y las dinámicas de quienes vivían en ellos (Centro Nacional de Memoria Histórica y Fundación Prolongar -CNMH, 2017). Incluso después de la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz

---

<sup>1</sup> Aunque estos tres términos remiten a diferentes tipos de elementos, en el texto se estandariza el uso de los términos “minas”, “minas antipersonal” o MAP por cuestión de practicidad.

Estable y Duradera, las MAP permanecen enterradas en el suelo como una amenaza permanente que mantiene las configuraciones violentas en los espacios.

Las minas imponen límites físicos y simbólicos que afectan la forma en que las personas se relacionan entre sí, destruyendo no solo las relaciones con el territorio sino las redes interpersonales que sirven como soporte de la vida en comunidad y que permiten hacer frente a esas mismas dinámicas violentas (Berg Harpviken, 2003).

Es por esto que, en el nuevo escenario creado con la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, es de gran relevancia analizar cómo las cerca de seis décadas de conflicto armado impactaron la forma en que se concibe y se vive el espacio, y lo que esto ha implicado en las relaciones sociales, así como en las proyecciones del futuro que se busca construir como sociedad.

Los datos recogidos por la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal -Descontamina Colombia muestran que se han presentado accidentes o incidentes por estas armas en 673 municipios del país (Descontamina Colombia, 2018), los cuales suelen hacer parte de zonas de frontera agrícola donde existe, además, un bajo nivel de inversión estatal (Bejarano, 2010).

Por lo tanto descontaminar el territorio mediante la remoción de minas antipersonal y remanentes de guerra se presenta como una oportunidad no solo de eliminar el riesgo directo de uno de los tipos de arma que afectan de manera más indiscriminada a la población civil, sino que puede ser una posibilidad de territorializar la paz al crear nuevas redes entre los actores de distintos sectores del país, fortalecer las capacidades de las comunidades, lograr un avance en el respeto a los derechos humanos, recuperar las prácticas cotidianas de las personas y ser la base de un futuro desarrollo social.

En los municipios afectados, la remoción de las minas puede convertirse en una herramienta de paz territorial que permita un mayor reconocimiento y participación

de los pobladores en las políticas públicas y que fortalezca las relaciones de estos entre sí, con los municipios vecinos y con las instituciones tanto estatales como de la sociedad civil.

A esto es a lo que algunos autores refieren como las *dimensiones políticas* del desminado humanitario: más allá de estar conectado a factores técnicos que pasan por la creación de tecnologías más efectivas, los aspectos de seguridad para ingresar a un territorio o el cumplimiento de estándares internacionales, el desminado humanitario está relacionado de manera inseparable con aspectos como la construcción de confianza, el reconocimiento y la reparación (Berg Harpviken y Skara, 2003). Es decir que, al afectar la configuración del territorio, sus límites y las costumbres de quienes lo habitan, estos procesos también se enlazan con el orden social, el sostenimiento y la consolidación de la paz (Campuzano, 2017, Raciti, 2006; Berg Harpviken y Roberts, 2004).

Al ser al mismo tiempo un proceso comunitario y una política pública, el desminado humanitario involucra de manera indiscutible la relación territorial de las comunidades, sus identidades y sus posibilidades de acción, constituyéndose como piedra angular de las garantías de no repetición y como un elemento necesario para generar dinámicas de participación que aporten a políticas de restitución, desarrollo local, reconocimiento y reconciliación. En esta medida, entender la construcción de redes como un aspecto ligado a las distintas dimensiones de la producción del espacio permite plantear nuevas posibilidades alrededor de los procesos que intervienen en la consolidación del mismo en tiempos de paz, y así enfatizar la perspectiva del desminado como un paso fundamental en la reconstrucción social.

En este sentido, las organizaciones encargadas de llevar a cabo las tareas de descontaminación del territorio desempeñan un rol determinante en la construcción de paz, ya que son articuladores entre las instituciones del Gobierno Nacional y las comunidades y organizaciones de base. Centrar el análisis en estas permite abordar

las perspectivas y avances en la Acción Integral contra Minas<sup>2</sup> y lo que esto conlleva para las maneras en que se concibe y se vive el espacio, y las formas en que se manifiesta la confianza social y la participación ciudadana en torno a estos temas.

Entre el trabajo de estas organizaciones es destacable el rol desempeñado por la Campaña Colombiana contra las Minas (CCCM). Además de ser reconocida como la principal organización civil nacional dedicada a la lucha contra las minas antipersonal, el acompañamiento a víctimas y la educación en riesgo de minas, ha mantenido un compromiso político basado en el entendimiento del contexto nacional y el acercamiento constante con las poblaciones en cuyo territorio desarrollan las diversas actividades, convirtiéndose en un referente necesario a la hora de aproximarse a los aspectos sociales y políticos de la descontaminación del territorio y su relación con la reconstrucción social.

Por lo tanto, el presente trabajo busca comprender cómo los procesos de desminado humanitario llevados a cabo por la Campaña Colombiana Contra las Minas han contribuido a generar cambios en la forma en que se relacionan los actores entre sí y con el espacio, y cómo estas relaciones contribuyen a la construcción de paz.

A partir de esto se señalan los siguientes objetivos específicos:

1. Describir los impactos sociales y en el espacio que ha tenido el uso de minas antipersonal en el país.
2. Analizar la perspectiva de las políticas públicas de desminado humanitario a nivel nacional.

---

<sup>2</sup> La Acción Integral Contra Minas se define según los estándares internacionales de Naciones Unidas como un conjunto de acciones políticas, sociales y económicas, cuyo objeto es reducir el impacto social, económico y ambiental que generan las Minas Antipersonal y las Municiones sin Explosionar instaladas o abandonadas en los territorios. Esta también incluye aspectos como la Educación en Riesgo de Minas, asistencia a víctimas de minas, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados, campañas a favor del desarme nuclear, y la destrucción del arsenal de minas (SWISSPEACE, 2016). Si bien estas actividades deben ser vistas de manera coordinada e integral, en el documento se hace especial énfasis en el desminado humanitario por permitir visibilizar de mejor manera la forma en que la materialidad del espacio interviene en el proceso de la construcción de paz.

3. Reconocer la forma en que las labores de desminado humanitario desempeñadas por la CCCM inciden en la transformación del espacio a partir de la creación y mantenimiento de redes entre actores.

El documento está planteado como un trabajo cualitativo exploratorio que permite una aproximación al estudio de las relaciones que sostienen las organizaciones de desminado con la población civil y con otras organizaciones, y de estas con el espacio, como aspectos complementarios de los procesos de desminado humanitario en tanto se los enmarca en la construcción de paz. Por lo tanto, no pretende ser una evaluación de la política pública en Colombia ni un trabajo exhaustivo de sus impactos a nivel comunitario.

La investigación se desarrolla con un enfoque descriptivo que se basa en dos estrategias de recolección de datos: por un lado, el trabajo con archivo a través de análisis de los marcos legales que se presentan para el desminado humanitario en el país, al igual que para la comprensión del contexto del problema de minas antipersonales y los remanentes explosivos de guerra en el territorio colombiano; la revisión de archivos de la CCCM y la revisión de múltiples trabajos sobre los procesos de desminado humanitario llevados a cabo en otros países que dan cuenta de retos, posibilidades y aprendizajes a tener en cuenta en la implementación de este tipo de programas y permiten dar luces a nuevas inquietudes y teorizaciones sobre esta medida de construcción de paz<sup>3</sup>.

Por el otro lado, se realizaron entrevistas semi estructuradas a miembros de la Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM) y miembros de organizaciones de derechos humanos de base comunitaria que han trabajado alrededor del tema de interés, al igual que de algunos habitantes del municipio de Vistahermosa, Meta,

---

<sup>3</sup> Por restricciones de formato, el presente documento no dedica una parte específica al desglose de estas experiencias, sin embargo, se recomienda ver los textos de Berg Harpviken, Skara, Millard y Bottomley consignados en la bibliografía.

zona que se ha visto fuertemente afectada por esta problemática y en la cual la CCCM y otras organizaciones adelantan actualmente trabajos de desminado.

La estructura del texto se divide en cinco apartados: el primero es la presente introducción, en el segundo se exponen los aspectos teóricos que sustentan la investigación, el tercero presenta una descripción de los efectos que ha tenido el uso de MAP a nivel social; en el cuarto apartado se hace referencia al panorama actual que hay frente al desminado humanitario en el país y la forma en que la Campaña Colombiana Contra Minas ha asumido desde la acción humanitaria contra minas la manera de crear y fortalecer redes entre actores y buscar un cambio de las percepciones del espacio que se habita, y finalmente, las conclusiones.

## CAPÍTULO II. EN TEORÍA

Los conflictos armados prolongados imponen la violencia como parte de las directrices sociales que guían los comportamientos en la vida cotidiana, ya que la convierten en referente de los imaginarios y las relaciones interpersonales y, al mismo tiempo, marcan a través de ella los espacios que se habitan. La pregunta por la construcción de paz pasa por la necesidad de transgredir esos órdenes sociales impuestos por la guerra y transformar las relaciones para construir una nueva visión compartida que permita edificar una sociedad en paz. De otro lado, la pregunta por el espacio sitúa el orden social en una perspectiva relacional en la cual las dimensiones social y material se construyen de manera dinámica y recíproca por medio de un proceso dialéctico.

El desminado humanitario entreteje de manera particular estas dos perspectivas al tener un impacto directo sobre la forma en que está configurado el espacio y visibilizarlo como un elemento central dentro de los procesos participativos de la construcción de paz (Berg Harpviken y Skara, 2003). A continuación, se exponen los postulados desde los cuales se aborda el análisis de las actividades de desminado humanitario en el caso de la Campaña Colombiana Contra Minas.

## **2.1 Construcción de paz**

Los conflictos armados profundizan las condiciones de injusticia, exclusión, desigualdad y discriminación en las comunidades. Estos efectos deben ser transformadas en sus dimensiones estructurales y culturales (Roberts y Littlejohn, 2005). Reconocer las rupturas que generan en la vida cotidiana de las personas, en sus relaciones, sus actitudes, sus prácticas y sus sueños, y la naturalización de una cotidianidad basada en temores, es entender que la capacidad de sobreponerse a ellos reside en involucrar a las personas y sus dinámicas sociales en visiones a largo plazo que permitan construir nuevas relaciones y nuevos entornos de vida.

La tramitación de conflictos de manera pacífica parte entonces del desarrollo de mecanismos que promuevan un marco de condiciones que permitan mejorar las condiciones de vida de las personas, un mayor acceso a los recursos y la propagación de una cultura de paz (Galtung, 1998, pp. 25- 28).

Este trabajo retoma el enfoque de la transformación de conflictos para analizar la forma en que el desminado humanitario logra estos cometidos. En ella se sostiene que para que la construcción de paz sea estable debe asumirse una perspectiva a largo plazo que no se base únicamente en la consecución de un acuerdo entre las partes enfrentadas, sino que se concentre en la búsqueda de mecanismos que conlleven cambios a nivel personal, grupal y sistémico (Castaño, 2013).

El objetivo final es lograr un cambio social constructivo que permita superar las relaciones de temor, recriminación mutua y violencia, cambiándolas por unas caracterizadas por el amor, el respeto mutuo y el compromiso proactivo (Lederach, 2007, p.75), a nivel interpersonal y grupal, pero también en aquellas relaciones sociales, políticas, económicas y culturales que estructuran de una forma más amplia la sociedad (Lederach, 2007, p.26).

De esta forma, se asume como un proceso dinámico que debe construirse continuamente con la participación de todas las personas de la sociedad (Lederach,

2007). Por lo tanto, comprende una multiplicidad de acciones y elementos interdependientes basados “en las realidades subjetivas y empíricas que determinan las necesidades y expectativas de las personas” (Lederach, 2007, p.52). Esto implica un cambio en la situación de conflicto como tal y, a su vez, en las dimensiones personales, intergrupales, estructurales y culturales del contexto particular.

Es decir, la paz sólo puede construirse de manera sostenible si se ponen en el centro los aspectos relacionales (Lederach, 2016). Al cambiar las estructuras que limitan y moldean las relaciones y la cultura en la que se legitiman se lograría una transformación de los conflictos. En esta medida, es de gran importancia mantener una perspectiva temporal en la que se abarque un conjunto de respuestas a crisis inmediatas que, a su vez, pongan en marcha procesos de cambio a largo plazo mediante el desarrollo de infraestructuras que permitan sostener una visión compartida de futuro (Lederach, 2009).

La aproximación a esta perspectiva relacional se realiza a partir de aspectos interpersonales como la construcción de redes, de confianza, y la participación. Sin embargo, en esta investigación se resalta la forma en que influyen las relaciones entre las personas y el espacio como elemento que proporciona un sentido de identidad, del cual las personas se apropian y transforman a través de sus acciones y que, por lo tanto, es necesario tomar en cuenta para generar estos procesos sostenidos de transformación.

### **2.1.1 La perspectiva de los líderes de nivel intermedio.**

El desminado humanitario es un proceso reciente en el país<sup>4</sup> y han sido las organizaciones no gubernamentales las encargadas de la implementación y el desarrollo de estas actividades; es por esto que se considera importante centrar la investigación en la perspectiva de los líderes de nivel intermedio. Esta categorización surge de la propuesta teórica de Lederach, quien ubica a los actores

---

<sup>4</sup> Si bien Brigadas Militares de Desminado han funcionado en el país desde 2002, la primera organización civil, Handicap International, se acredita en labores de desminado hasta el 2015 (Descontamina Colombia, s.f).



y sus estrategias de construcción de paz en una pirámide por medio de la cual esquematiza tres niveles de liderazgo: alto, medio y de base<sup>5</sup> (Lederach, 2007).

Según el autor, los líderes de nivel medio tienen una posición privilegiada en la construcción de redes, la visibilización de procesos de base y la construcción de confianza en los contextos de transformación del conflicto armado. Son personas respetadas como individuos, redes de colectivos o instituciones que tienen la capacidad de ser al mismo tiempo reconocidos por los principales líderes políticos y militares, y mantener contacto con las bases (Lederach, 2007).

Esta es la razón de que estos líderes tengan un mayor potencial para dar pie a una infraestructura capaz de sostener los procesos de construcción de la paz a largo plazo, porque su capacidad para moverse entre los diferentes niveles de la sociedad les permite proponer iniciativas prácticas que traten cuestiones inmediatas y al mismo tiempo se orienten hacia análisis sociales más amplios. Gracias a esto pueden relacionar a las personas a través de redes institucionales, culturales e informacionales que posibiliten traspasar los límites impuestos por el conflicto (Lederach, 2007, p.90).

Además, tienen la capacidad de acompañar la consolidación de la paz desde los niveles personal, estructural y cultural, al manejar información acerca de los intereses y expectativas de las partes en el conflicto, así como de aquellos interesados en apoyar a la construcción de paz. De esta manera son capaces de tejer redes entre los distintos niveles que facilitan la construcción de confianza (Lederach, 2009).

De acuerdo con Paffenholz (citado en Galavis, 2013) a los aspectos mencionados se suma su capacidad de manifestar los cambios que un conflicto armado genera en la vida de la sociedad, en las actitudes, los comportamientos, y la seguridad a

---

<sup>5</sup> Los liderazgos altos están conformados por los principales líderes militares y políticos, con alta visibilidad y poder de decisión. En la base se encuentran los líderes locales, promotores de desarrollo comunitario y los funcionarios locales. Estos niveles se relacionan vertical y horizontalmente de manera dinámica. Ver: Lederach, 2007; pág. 85.

nivel individual, el cambio de relaciones de poder en el nivel comunitario y las modificaciones a gran escala de carácter político económico y legal, creando condiciones significativas de visibilización y empoderamiento social.

Al partir de estas características, las organizaciones de la sociedad civil como la CCCM tienen la capacidad de plantear las dimensiones sociales del desminado humanitario como un modo de enraizar la transformación de conflictos en cada contexto particular, de modo que a través de estos procesos se retomen los aportes y conocimientos de las personas implicadas mediante la creación de redes entre los diferentes actores de la sociedad.

### **2.1.2 Construcción de redes.**

Las redes de relaciones son el conjunto de vínculos desde los cuales se construye la vida en sociedad. En contextos de conflicto armado este tejido social se fragmenta al perderse o condicionarse los espacios que permiten la interacción entre las personas y las distintas prácticas o tradiciones que edificaban su identidad y su sentido de comunidad (Maclean, 2016).

Al fragilizarse estas redes, se limita la capacidad de las personas de recurrir a otros que puedan colaborar en las soluciones de problemas comunitarios (Ballester y Bacual, 2014). En esta medida se da una pérdida del sentido de lo público, ya que los espacios de decisiones colectivas que marcan las pautas de los valores compartidos se trastocan (Toro y Rodríguez, 2001).

Teniendo esto en cuenta, los procesos de transformación del conflicto deben tener como foco la reconstrucción de un trabajo en red en el que se asuman las relaciones desde una perspectiva recíproca de respeto mutuo y confianza. Con esto se promueve la cooperación, la socialización y el intercambio, construyendo así nuevas posibilidades de acción (Saiz, 2007).

Es así como haciendo uso de una comparación con las características de las telarañas, Lederach propone que las redes deben funcionar como un puente entre puntos diferentes y opuestos que se unen en un eje creando una estrella que

funciona como almacén. A partir de esta se crean círculos externos que permiten fortalecer las conexiones y crear nuevas intersecciones que soporten la telaraña. De esta manera se construyen estructuras resistentes y al mismo tiempo flexibles, de modo que puedan adaptarse y redefinir sus conexiones de acuerdo con los entornos cambiantes en que se inscriben (Lederach, 2016).

En este sentido se resaltan tres características que deben tener las redes: tener conexiones interdependientes con independencia localizada entendiendo cada intersección es un punto desde el cual se robustece la red, estar coordinadas desde un centro sin que se centralicen todos los procesos de modo que una afectación localizada no destruya la red, y ser adaptables, permitiendo rehacer la red de conexiones de acuerdo con los contextos y realidades de un contexto determinado. Por lo tanto, la red depende de puntos de anclaje estratégicos desde los cuales se interconectan grupos, lugares, personas o procesos particulares que generan el cambio social (Lederach, 2016, p. 129).

Un alto nivel de conexión entre los distintos puntos de la red permite además un intercambio continuo de información y de prácticas que aportan a la construcción de normas y valores compartidos desde los cuales se establecen las interacciones. Así se desarrollan actitudes de colaboración y solidaridad entre individuos o grupos, y se potencializa la distribución de los recursos presentes en una comunidad según su capacidad de incidencia (Ballester y Bacual, 2014).

En este sentido, es necesario construir una base social que se resalte “la relevancia de la cultura en los distintos planteamientos de transformación de conflictos y compromiso a largo plazo” (Lederach, 2001; p.12), destacando a las personas del territorio y su conocimiento sobre el lugar como el recurso más importante para la paz (Lederach, 2001).

De esta manera, se aumenta el capital social considerado como el agregado actual o potencial de recursos que están relacionados con la posición estable y duradera de una red más o menos estable (Bourdieu citado en Saiz, 2006). Es decir, las

relaciones que se entretajan en la red tienen la capacidad de aumentar los medios con los que cuenta cada persona u organización en el desarrollo de sus actividades. Para que esto se dé es necesario tener presente un aspecto fundamental en la construcción de redes: la confianza.

### **2.1.3 Construcción de confianza.**

La capacidad de establecer redes está directamente relacionada con la construcción de confianza, es decir, con la percepción que existe acerca de la relación que mantienen unos con otros (Lederach, 2017). En contextos de conflictos sociales violentos estas relaciones se deterioran profundamente. Tal como lo mencionan Paffenholz y Spurk:

Las condiciones necesarias para que la sociedad se desarrolle empeoran durante el conflicto. La infraestructura física se destruye, limitando la comunicación y el intercambio; las estructuras estatales e instituciones a las que la sociedad civil se dirige se debilitan o no responden, la seguridad es baja (...), se suprimen ciertos derechos humanos básicos, desaparece la confianza y el capital social, más allá del ámbito familiar, de clan o etnia es destruido (2006, p.11; traducción propia)

Por tanto, el restablecimiento de relaciones cobra especial importancia a la hora de implementar acciones, proyectos o políticas en contextos donde el conflicto dejó profunda desconfianza entre las personas y hacia las instituciones. En esta medida, se presenta la necesidad de construir nuevas institucionalidades con las personas afectadas (y no solo para ellas) que partan del reconocimiento de las razones históricas y culturales que llevaron a un ambiente de desconfianza (Moreno, 2017).

La confianza se entiende entonces como un proceso dinámico y continuo que se forma en las interacciones cotidianas y, a su vez, está presente en condiciones estructurales, sociales y culturales, aumentando así las posibilidades de acción de los individuos (Sztompka, 2001).

El punto de partida de la confianza es la experiencia del mundo que interpretamos como realidad. Esta experiencia se da desde una posición personal de interés individual, la cual está anclada en un ambiente social y moral particular (Möllering, 2001; Sztompka, 2000). Es decir, es a través de lo que se vive y se conoce a nivel

emocional y racional que se llega a confiar o no en alguien, convirtiéndose en un proceso continuo y reflexivo (Möllering, 2002; p.414). Así, la confianza incorpora una dimensión temporal que depende de contextos pasados y a la vez orienta las acciones presentes hacia el futuro (Sztompka, 2001).

La capacidad de confiar está sumida en lo que Sztompka (2001) denomina las condiciones estructurales que favorecen el surgimiento de la confianza: una normatividad coherente, la estabilidad del orden social, la transparencia de las organizaciones sociales, la familiaridad del ambiente en el que se desarrollan las acciones y los procesos de responsabilidad de instituciones y de otras personas.

A estos elementos, el autor suma unos capitales colectivos que facilitan el aprovechamiento de estas condiciones, entre ellos se resalta el capital social que enmarca a las personas en relaciones de solidaridad, seguridad y apoyo, y el acceso a las instituciones por medio de las cuales se puede responsabilizar a quienes incumplen los pactos de confianza (Sztompka, 2001).

La combinación de estos aspectos configura una cultura de confianza que cumple varias funciones sociales: fomenta la socialización y la participación con otros a través de diversas asociaciones mejorando las relaciones y los lazos interpersonales, amplía el campo de interacción entre grupos y personas, y permite una mayor intimidad en los contactos entre sujetos. Además, fortalece el vínculo entre un individuo y su comunidad, favorece el flujo de comunicación, promueve la tolerancia y el reconocimiento del otro, contribuye al sentimiento de identidad y genera solidaridades fuertes que llevan a la cooperación y a la creación de una sensación de orden y seguridad (Sztompka, 2001).

En las relaciones de trato directo, entre los grupos sociales o hacia las instituciones, la confianza recíproca aporta a la creación de una red de lazos que amplían los horizontes de acción a través de los intercambios de información, lo cual ayuda en a consolidar diversas dinámicas de cooperación (Sztompka, 2001). En la medida en que la creación de redes ayude a constituir una cultura de confianza que fortalezca

las relaciones entre las bases y las entidades estatales, y entre los miembros mismos de la comunidad, se hace posible que se consoliden espacios de participación que se encaminen hacia la construcción de paz.

#### **2.1.4 Participación.**

Es necesario, entonces, reconocer que la ciudadanía no recibe de forma pasiva programas o políticas que se diseñan, sino que es una parte integral e instrumental del cambio social (Lederach, 2009). Los actores que han vivido en medio de los conflictos armados internos son quienes cuentan con los conocimientos del contexto; por lo tanto, sus recursos históricos, culturales y simbólicos son invaluable para entender las causas profundas de los conflictos y buscar las soluciones más adecuadas a estos (Donais, 2011).

En la medida en que el desminado humanitario se inserta en procesos que buscan establecer una infraestructura en la cual participen los diferentes niveles de la sociedad (Berg Harpviken, 2010; Erling, 2008), tiene como punto de referencia la creación o potencialización de aquellas capacidades de las personas que permitan sobrepasar las divisiones sociales instauradas durante el conflicto y puedan ponerse a disposición de una reconciliación social profunda (Lederach, 2016; Roberts y Littlejohn, 2005).

Para esto es necesario que tanto las personas como las organizaciones reconozcan su interdependencia frente a las demás personas, y su posición dentro de las redes, de manera que se puedan lograr espacios y mecanismos accesibles de participación local que, desde las acciones prácticas, consigan construir nuevos referentes sociales (Dalmazza, 2011).

Bajo estas premisas, se entiende la participación desde una perspectiva comunitaria, social y ciudadana, definiéndola como “el conjunto de posibles interacciones entre los ciudadanos y entre éstos y las instituciones públicas orientados a intervenir, de manera directa o a través de sus formas de organización, en los asuntos públicos” (Maldonado, 2018). Esto depende del establecimiento de

mecanismos de representación que se inserten en espacios de deliberación, toma de decisiones y trabajo común, así como de la ampliación de la interacción entre ciudadanos, organizaciones e instituciones públicas, de modo que se logre cierto nivel de transparencia en los procesos informativos, consultivos, deliberativos y decisorios (Maldonado, 2018).

De esta manera, se reconoce la diversidad de los ciudadanos como punto de partida para crear espacios inclusivos, haciendo énfasis en la responsabilidad que comparten con las instituciones públicas en la construcción de las nuevas visiones de país, y buscando hacer efectivos sus derechos, su contribución al desarrollo del territorio y el fortalecimiento de los vínculos entre los mismos ciudadanos y con los distintos niveles de administración pública (Ceballos y Martin, 2001).

En los contextos de construcción de paz la inclusión de la sociedad civil incide en el fortalecimiento de la democracia y la sostenibilidad del acuerdo. En la medida en que los actores locales contribuyen en el diseño y la implementación de programas y políticas que tengan en cuenta su entendimiento de las tradiciones y del contexto, se produce una apropiación local del proceso de construcción de paz desde la cual se afianza su conveniencia y legitimidad (Paffenholz, 2015; Erling, 2008; Millard y Berg Harpviken, 2001).

Como muestra de esto, las políticas públicas encaminadas a la construcción de paz en el país han incorporado el enfoque de paz territorial que establece como prioridad la construcción de espacios de discusión a nivel territorial en los cuales se delibere alrededor de propósitos comunes que encaminen la gestión de lo público a través del respeto y la cooperación (Jaramillo, 2014; Departamento Nacional de Planeación -DNP, 2015, pp. 42-43; 414-415). Así se buscan fortalecer ambientes comunicativos en los que la interlocución permite comenzar a restablecer los lazos sociales y la sociabilidad entre los individuos y grupos que comparten unos marcos de experiencia determinados (Vidal, 2015; Toro y Rodríguez, 2010).

Por esto, se entiende que las medidas en torno a recuperar los espacios de interacción y visibilizar las voces de las personas dentro de los procesos públicos de discusión, constituyen una forma de crear acceso y fortalecer el compromiso con la construcción de paz (Lederach, 2016, p.95).

La participación supone un interés ciudadano desde el cual se forja el espacio público. Las personas y comunidades son quienes promueven el reconocimiento, el respeto, y la confianza social, y esto se traduce en la re-ocupación de espacios sociales como las plazas, calles, parques y paseos desde donde se involucran con lo público (Oviedo y Abogabir, 2000).

Las interacciones en las que se construye la confianza y las redes que permiten una participación activa de las personas se expresan y realizan en el espacio. En sí, los espacios son esencialmente comunicativos ya que constituyen distintas formas de pensamiento y afectividad desde lo colectivo (Fernández, 1991), por lo tanto, son un elemento clave en los procesos de integración social (Santos, 2000).

Los lugares de encuentro en la cotidianidad, entonces, pueden llegar a traducirse en el fortalecimiento de la vida comunitaria, lo que a su vez puede conducir al establecimiento de nuevas formas de participación política. Así, lo público y lo político se asocian mediante la organización de los espacios físicos y simbólicos de participación ligados a sentimientos de pertenencia e inclusión (Alguacil, 2008) y constituyen aspectos claves en las formas en las que se reconstruyen las relaciones sociales con miras a la construcción de paz.

## **2.2 El rol del espacio**

Los esfuerzos de construcción de paz deben incluir, entonces, la necesidad de desbaratar las lógicas de violencia que configuran los espacios y restablecer un orden que permita tejer nuevas formas de relaciones entre las personas. En este sentido, el cambio social implica también la producción de un espacio que permita superar las estructuras desiguales y excluyentes que se profundizan con la presencia diferenciada del conflicto armado en los diversos territorios (Ospina, 2014).



Es por esto que la investigación busca aproximarse a la perspectiva de la geografía social, que consiste en la comprensión de que “los hechos sociales tienen por sus localizaciones y sus manifestaciones, dimensiones espaciales y que los hechos geográficos comportan aspectos sociales que concurren en su comprensión y su evolución (...), es fundamentalmente la exploración de las interrelaciones que existen entre las relaciones sociales y las relaciones espaciales” (Hérin, 2006, sección 2 párrafo 3)

En esa medida se recupera el rol central del espacio, definiéndolo como “un conjunto indisoluble de sistemas de objetos y sistemas de acciones” (Santos, 2000; p.253). Los objetos pueden ser naturales o creados a lo largo de la historia por las personas e insertados en el espacio constituyendo la configuración territorial. A partir de esto son llenados, animados y eventualmente transformados por las variables económicas, culturales y políticas de las dinámicas sociales, de manera que ninguno de los dos sistemas puede actuar de manera independiente (Santos, 2000).

En tanto producto social, el espacio es al mismo tiempo condición y resultado de la acción de los individuos y comunidades en el entorno (Lefebvre, 2013). Es decir, el territorio se compone y recompone constantemente a través de los usos, las formas de producir, los intercambios y las percepciones de quienes viven en él como parte de un proceso lento e imperceptible. Es así como la historia se fija paulatinamente en el espacio, creando límites y posibilidades para nuevas acciones o actividades sociales que a su vez se vuelven a inscribir sobre el territorio (Santos, 1997).

A partir de esto se deduce que el espacio tiene un carácter político e ideológico. En él se expresan las contradicciones y los encajes entre el orden social producido por los planeadores institucionales, y las formas de uso y representación de los habitantes del lugar. En este sentido, el espacio está abierto a la lucha por su propiedad, pero también por sus significados, sus usos y sus formas de vivirse (Delgado citado en Vidal, 2015; párrafo 2).

En el plano global las acciones constituyen normas de uso para los sistemas localizados de objetos, mientras que en el plano local los territorios constituyen una norma para el ejercicio de las acciones (Santos, 2000). Así, concurren y se sobreponen territorialidades locales, regionales, nacionales e internacionales con intereses, percepciones, valores y actitudes territoriales distintas que generan relaciones de complementación, cooperación y conflicto (Cuartas, 2014). Las múltiples definiciones del espacio se producen de forma simultánea a través de las imposiciones verticales desde espacios técnicos, políticos y económicos tanto nacionales como internacionales que representan vínculos entre puntos discontinuos, así como desde acciones locales horizontales entre las áreas vecinas que pueden llevar a la acción política en torno a intereses colectivos (Zusman, 2002).

El espacio interviene en la sociedad como apoyo de la vida y de las diversas actividades diarias, de forma que no solo las localizaciones y distancias asumen importancia en la organización del espacio, sino también las redes de circulación y comunicación (Vidal, 2015). La forma en que interactúan estos aspectos implica la existencia de distintos modos de regulación social en los diferentes niveles espaciales y, por lo tanto, una administración del espacio por medio del ejercicio de poder.

### **2.2.1 Conflicto y espacio.**

La violencia actúa como un eje estructurador de los sistemas territoriales. Genera cambios contundentes e intempestivos que afectan los escenarios familiares, colectivos e individuales, crea fronteras internas, y lleva a la reconstrucción de los referentes de identidad y de los códigos de articulación social (Osorio, 2009). A partir de esta se profundiza la injusticia espacial, es decir, el uso y acceso inequitativo del espacio, sus recursos y su estructura (Cuartas, 2014). Los espacios que resultan de estas injusticias crean estructuras desiguales que otorgan privilegios específicos a sectores particulares de la sociedad, categorizando entre las personas el espacio, los recursos y las oportunidades de acceder a ellos (Soja, 2010).

Las geografías de la guerra expresan instancias de poder que tienen algunos actores armados sobre los territorios, lo cual ha sido determinante en la

configuración territorial en Colombia (García y Aramburo, 2011). Estas han tenido un carácter espacialmente diferenciado en intensidad, así como en acciones, actores y formas de resistencia, lo que ha contribuido a la marginalización y profundización de ciertas desigualdades sociales en el país (Ospina, 2014).

En esta medida, los distintos actores armados han tenido la posibilidad y el poder de posicionar, subordinar, clasificar, excluir, reconocer e imponer formas particulares de relacionamiento y organización social. Esto no solo se ha logrado a partir de la acción militar directa, también se ha hecho a través de las intervenciones e intereses de los poderes regionales y nacionales en estos lugares, la espacialización de procesos productivos tanto legales e ilegales, e incluso a partir de las estigmatizaciones asociadas a lugares geográficos, y por tanto a sus pobladores, que profundizaron situaciones de violación a los derechos humanos a lo largo del territorio (Ospina, 2014).

Sin embargo, quienes habitan estos lugares no asumen pasivamente estas imposiciones. Las personas encuentran diversas formas de adaptarse o de actuar colectivamente desde sentidos de supervivencia, y más aún, de construcción política que emergen ya sea como legitimaciones, resistencias o alternativas a estas visiones que se buscan implantar (García y Aramburo, 2011).

Incluso en el caso de los programas y políticas que promueven el desarrollo, la reconciliación, la participación o la convivencia, es necesario entender la manera en que estas planificaciones se entremezclan con los sentidos de lugar, las redes, las identidades y las prácticas de quienes residen en un determinado espacio.

### **2.2.2 Paz y espacio.**

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede ver cómo el desminado humanitario resalta el papel activo que tiene el espacio en la construcción de relaciones sociales que permitan superar las dinámicas violentas en nuestro país al buscar transformar directamente la configuración de los territorios. Tal como lo expone Lederach:

La clave para desencadenar el cambio y hacer que perdure exige imaginación, nuevas formas de pensar y el desarrollo de procesos que tejan relaciones y conexiones y que creen los espacios sociales que conforman el entramado invisible de la comunidad humana dentro y más allá de la geografía de la violencia (2016, p.159).

Analizar la dimensión espacial permite tener en cuenta la importancia de un cambio amplio en lo social y lo nacional, pero al mismo tiempo, resaltar la forma en que esto se aplica en aquellos lugares de la experiencia directa: la comunidad local (Lederach, 2016, p.97). Además, al insertarla en una mirada temporal a largo plazo como lo plantea el marco de la transformación de conflictos, la búsqueda de una mejora profunda en la calidad de vida se encadena a los cambios en el espacio y las dinámicas sociales, teniendo como propósito el logro de la justicia espacial.

La (in)justicia espacial puede ser entendida desde los procesos sociales que insertan en el espacio condiciones injustas, o desde la manera en que el espacio en sí mismo produce y profundiza exclusiones y desigualdades sociales. En este sentido, la organización política del espacio es una fuente de injusticia. Esto se materializa a partir de la imposición de estructuras duraderas de ventajas y desventajas que se distribuyen de forma desigual en el país, las cuales se pueden transformar a través de la acción política (Soja, 2010).

Así, la búsqueda de la justicia espacial se basa en la relación entre las mejoras en la calidad de vida, el reconocimiento social y la pertenencia territorial ligada al respeto y la dignificación de las personas, la libertad de movimiento en el espacio, la posibilidad de participación política en las decisiones sobre el lugar donde se vive y la cohesión a través de prácticas espaciales que permiten el uso y la apropiación de los espacios de vida (Ver anexo 1) (Álvarez, 2013).

Esta perspectiva permite ver la manera en que las luchas por el espacio pueden ser utilizadas para construir una mayor unidad y solidaridad transversal, que propenda por la búsqueda de la libertad, igualdad, democracia y derechos civiles (Álvarez, 2013). Es por esto por lo que se asume como una mirada necesaria en el análisis del caso de los programas de desminado humanitario llevados a cabo por la

Campaña Colombiana Contra Minas, de manera que se puedan entender sus contribuciones a la construcción de paz.

### CAPÍTULO III. LAS MINAS ANTIPERSONAL Y SUS EFECTOS SOCIO-ESPACIALES

La diversidad de estrategias utilizadas durante el desarrollo de los enfrentamientos en el país legó la problemática de las minas antipersonal como uno de los asuntos más apremiantes a resolver, especialmente por el peligro que representan para la seguridad de la población civil. Las cifras que ha dejado esta problemática han llevado a que, en la actualidad, Colombia ocupe el sexto lugar a nivel mundial en el número de víctimas por MAP y REG, detrás de Afganistán, Libia, Myanmar, Ucrania y Yemen (International Campaign to Ban Landmines [ICBL-CMC], 2017).

El Registro Único de Víctimas tiene registradas 11.061 víctimas por minas antipersonal y 568 víctimas de municiones sin explosionar<sup>6</sup>, sumado a esto se calcula que hay aproximadamente 51,2 millones de metros cuadrados de territorio contaminado en 673 municipios de los cuales el mayor número de víctimas se han concentrado en Vistahermosa –Meta, Tame –Arauca, San Vicente del Caguán –Caquetá, Montañita –Caquetá y Tarazá -Antioquia (Descontamina Colombia, 2017).

De estas víctimas, una de cada cinco ha muerto por la explosión o las heridas que resultaron de ella. El 61% han sido miembros de la fuerza pública, el 5% han sido civiles mayores de edad y el 26% menores de dieciocho años. Aunque su uso en el territorio inició en los años setenta, alcanzó su punto más crítico en el pico de la confrontación militar en el año 2006, cuando se presentaron 1.232 víctimas (Descontamina Colombia, 2016).

Si bien hoy en día se siguen presentando eventos de siembra, accidentes y decomiso de minas antipersonal por parte del ELN y de grupos armados organizados (RCNRadio.com, 2018; Canal1, 2018; InsightCrime, 2014), en los

---

<sup>6</sup> Datos con fecha de corte del 31 de octubre de 2018.

últimos años y en especial luego de la firma del Acuerdo Especial<sup>7</sup> en el marco de los diálogos de La Habana, las cifras han presentado una disminución continua. En lo corrido del 2018 se han presentado 113 víctimas (Descontamina Colombia, 2018).

Estos datos muestran la gran amenaza que representa el uso de este tipo de armas. Cuando las minas antipersonal son implantadas en el territorio se pierde toda capacidad de controlar su impacto; cualquier persona que habite o transite por las zonas cercanas se vuelve susceptible de activarlas y quedar afectado por su detonación. Estas características, sumadas a la falta de información que tienen las personas sobre los lugares en los que encuentran ubicadas, causan trastornos en las dinámicas cotidianas, los recorridos en los territorios, los usos de la tierra, el orden social y las relaciones sociales entre las personas (Skara, 2003).

### **3.1 El uso de Minas Antipersonal en el contexto colombiano**

Es necesario comprender las lógicas que hay detrás del uso de las MAP en el contexto de los conflictos armados para entender cómo afectan no solamente a las víctimas que las activan, sino también la vida de todas las personas que conviven el territorio en que se encuentran.

Más allá de su efecto sobre el control territorial, el uso de minas antipersonal pretendía ser una táctica de nivelación de la capacidad ofensiva entre el Ejército y los grupos insurgentes, aprovechando la ventaja que estos tenían respecto al conocimiento de las zonas de combate (Bejarano, 2010). El primer registro que se tiene de su uso sistemático en el país corresponde al ELN en 1974 (CNMH, 2017; p.42), pero especialmente, cuando el Estado retoma la iniciativa militar a partir del 2001, que se hace más frecuente el uso de las MAP (CNMH, 2017). Y aunque han sido usadas en mayor medida por parte de los grupos insurgentes, también fueron

---

<sup>7</sup> El 7 de marzo de 2015 se suscribió el Acuerdo sobre Limpieza y Descontaminación del Territorio de la presencia de Minas Antipersonal (MAP), Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) y Municiones Sin Explotar (MUSE) o Restos Explosivos de Guerra (REG) en general. En el Comunicado conjunto #52, las FARC-EP y el Gobierno Nacional acuerdan organizar un proyecto piloto de descontaminación del territorio con la ayuda de Ayuda Popular Noruega, como parte de las acciones de desescalamiento y construcción de confianza (Ver página 34).

sembradas en bases militares del Ejército hasta el año 2002 cuando el Estado colombiano ratificó el Tratado de Ottawa.

Las MAP constituyen tecnología fácil de usar y efectiva. Se producen con materiales de muy bajo costo que fácilmente pasan desapercibidos, permitiendo contrarrestar la creciente tecnificación de las armas del Ejército (Ibarra, 2016). Por tanto, su posición en los terrenos mantiene una estrecha relación con las zonas y los periodos de tiempo en que estaba activa la confrontación con las Fuerzas Armadas en los distintos territorios del país (CNMH, 2017; Salas, 2015). En tanto el conflicto armado es una experiencia permanentemente móvil, el uso de las minas antipersonal, incluso en una misma región, fluctúa según los momentos coyunturales en los que se desplegaban o replegaban las tropas de los grupos armados (Álvaro Jiménez, comunicación personal, 2018).

Pese a sus efectos indiscriminados, sus múltiples ventajas estratégicas llevaron a que se privilegiara la perspectiva militar que apoyaba su uso. Por un lado, constituyen una forma de defensa mediante la cual se salvaguardan los miembros de la organización en aquellos enfrentamientos en que se encuentran en desventaja (Campuzano, 2017). Así, estas armas se instalaron alrededor de los campamentos guerrilleros como una forma de protección frente a una avanzada del Ejército y se enterraron cerca de caminos de tránsito obligatorio para las tropas militares, cerca de los claros de aterrizaje de los helicópteros y de recursos importantes para la supervivencia como las fuentes de agua, posibles sitios de refugios como grandes árboles o casas abandonadas, e incluso torres de luz, con el propósito de diezmar las capacidades y el número de soldados adversarios (CNMH, 2017; p. 90, Berg Harpviken y Millard, 2013).

Igualmente, las minas se sembraron cerca de los cultivos de coca y marihuana como una manera de proteger estos recursos. De hecho, cuando se hace la relación a nivel nacional, la mayoría de los atentados por minas antipersonales han ocurrido en los corredores estratégicos y zonas donde proliferan los cultivos ilícitos

(Bejarano, 2010; CNMH, 2017). En la actualidad esto sigue siendo un problema, ya que desde 2007 se ha presentado un aumento en la cantidad de víctimas que trabajan como erradicadores manuales (VerdadAbierta.com, 2015).

Por otra parte, la detonación de las minas funcionó como una alerta acerca de la presencia de personas ajenas al grupo armado, y permitía trasladar la confrontación hacia un escenario de 'guerra psicológica' en tanto su explosión pretendía desmoralizar a las tropas que debían encargarse de atender al personal herido, que podía quedar incapacitado permanentemente. Esto pretendía generar miedo entre los soldados y evitar una posible avanzada (CNMH, 2017).

Esto muestra el peligro que significa la siembra de minas para la población civil y la forma en que marca el espacio en el que viven. A partir de su uso se crearon nuevos límites en el territorio que convertían los lugares de su cotidianidad en posibles escenarios de un atentado: las zonas de agricultura, los claros en los que se conseguía madera, los caminos demarcados para transitar desde sus casas hacia otros lugares, las fuentes de agua e incluso sitios como los caminos cercanos a las escuelas y los colegios se convirtieron en lugares de profunda incertidumbre para los lugareños, limitando sus posibilidades de habitar sus espacio y minando también las relaciones que mantenían con las otras personas de la zona (MacLean, 2016; Berg Harpviken *et all.*, 2003; Scheu, 2002).

Aunque el Acuerdo de Paz es uno de los pasos más importantes para comenzar a cambiar la dinámica social basada en un imaginario de confrontación a una de construcción conjunta, el problema de las minas antipersonal permanece como un cruel legado.

Es entonces necesario resaltar que, si bien la sociedad y el espacio se producen mutuamente mediante un proceso continuo, este proceso no es simultáneo. En este caso, los cambios en las dinámicas sociales que se proponen desde el Acuerdo de Paz no se ven reflejados inmediatamente en un cambio en el espacio; las minas antipersonal que permanecen sembradas se convierten en rugosidades en el



territorio, es decir, herencias sociogeográficas de momentos pasados que se resisten a adaptarse a nuevas funciones sociales (Santos, 2000; p.121)

En medio de la confrontación, su uso estaba permeado por razones y análisis militares estratégicos, pero, una vez que esta termina, permanecen negando el acceso de las personas a su territorio y, por tanto, es necesario asumir su remoción como un cambio que debe hacerse desde un proceso social consciente y reflexivo, de modo que se pueda dar respuesta a los impactos que existen sobre las personas, las comunidades y su espacio.

### **3.2 Los efectos sociales de las minas antipersonal**

En vida de las personas, el espacio no es solo un marco en el que desarrollan sus actividades, sino que, a través de prácticas como el trabajo, la recreación, el recorrerlo, el caminarlo y el habitarlo, se asumen rutinas, costumbres, memorias y cultura que cimentan las relaciones de un grupo. Esto significa que las circunstancias en que se habita y se utiliza un territorio son una parte intrínseca de la identidad tanto individual como colectiva de las comunidades que viven en él.

Al mismo tiempo estas prácticas van dejando su huella en el espacio por medio de las construcciones, los caminos, las delimitaciones y las marcas territoriales, que se traducen en un orden social particular que impacta en la capacidad de acción que tienen las personas. De esta manera, la práctica espacial de una sociedad produce lenta y continuamente el espacio, dominándolo y apropiándose de él en una relación dialéctica, generando una cierta cohesión social (Lefebvre, 2013; p.92).

Las minas constituyen una marca que transgrede el contexto a partir de un cambio en el espacio, transformando las maneras de usarlo y habitarlo, y con esto, desgarrando profundamente los vínculos sociales y suplantándolos con relaciones basadas en la lógica de la guerra, forzando a cambiar aspectos como las condiciones de trabajo, el reconocimiento de lo público, las relaciones comunitarias e incluso las familiares (Berg Harpviken e Isaksen, 2004; Millard y Berg Harpviken, 2001).

En medio del conflicto, los espacios se planifican mediante la prioridad institucional de la guerra contra las guerrillas y de las configuraciones locales que estas iban transformando (Cuartas, 2014; Velásquez y Peña, 2005). El dominio del territorio, tanto por parte de los grupos guerrilleros y paramilitares como del Gobierno Nacional, se dio entonces a partir de la lectura de los espacios desde la estrategia de confrontación militar, imponiendo visiones del espacio formuladas desde los ámbitos verticales (Santos, 2000). En este sentido, los territorios fueron prescritos como escenarios de disputa a dominar por medio de la acción armada, dejando de lado las necesidades, vidas y costumbres de los habitantes (Osorio, 2009).

Al imponer nuevos límites en el espacio y en el comportamiento, las minas enterradas crean nuevas dinámicas entre las autoridades económicas, humanitarias, políticas y militares, y entre los pobladores (MacLean, 2016; Pérez, 2004), llevando a que la ciudadanía pierda el espacio público frente a la militarización y la apropiación policiaca de estas territorialidades, instrumentalizando las prácticas y la vida de las personas (Salas, 2015).

Es decir, a través de la siembra de minas, los hábitos de las personas se convierten en un factor de daño al adversario y en garantía de su ejercicio de poder (CNMH, 2017; Ibarra, 2016). La creación de fronteras invisibles pero conocidas mediante el uso de MAP impide la libre circulación de las personas, quebrando sus relaciones con otros, y regulando los tiempos y actividades de quienes permanecen dentro de la zona (CNMH, 2017; p.112).

Esto conlleva la profundización de la marginalidad de estas regiones y constituye una serie de abusos a los derechos humanos<sup>8</sup>. Los confinamientos a los que se somete a la población también afectan actividades económicas, la entrega de ayudas humanitarias, e incluso la misma atención médica que se hace necesaria

---

<sup>8</sup> Entre los derechos violados por la presencia y/o sospecha de campos minados se encuentran la vida, integridad física y bienestar socioeconómico, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud física y mental, el acceso a la educación y a la vivienda, la libertad de movimiento y asociación, el derecho a la participación política, el acceso a servicios públicos, y la participación en la vida cultural (PAICMA, 2014).

cuando una mina es activada y las opciones de rehabilitación que resultan como consecuencia (Ibarra, 2016; Ball, 2011; Corte Constitucional, 2008).

Además, los lugares del país donde se concentra la presencia de MAP hacen parte de la frontera agrícola y afectan los espacios que usan los pobladores para su sustento (Ospina, 2014; Velásquez y Peña, 2005). Esto hace que uno de los problemas más representativos para las comunidades sea la pérdida de área de cultivo o el acceso a materiales necesarios para el trabajo diario. Así lo evidencia uno de los testimonios recogidos:

Por ejemplo, yo vivo acá, ¿sí?, pero por allá al otro lado yo tengo una parcela y hay mucha gente que allá tiene sus parcelas y tienen su tierra para cultivar o sus casas incluso, y cuando aquí se hacían los combates allá estaban las guerrillas y acá estaba el Ejército y los paramilitares, entonces uno no podía cruzar y muchas de esas tierras quedaron abandonadas. Yo iba de vez en cuando a trabajarle, pero es que eso era arriesgarse mucho. Y yo sé que por allá habían unas de esas minas, de esas bombas, entonces tocaba estar con mucho cuidado cuando se iba por allá (Habitante de Vistahermosa, Meta; Comunicación Personal, 2018).

En zonas rurales, esto genera una precarización de las condiciones de vida de las familias que dependen del campo, no sólo por la pérdida de posibles cultivos, sino también por las restricciones que existen para poder comercializar sus productos. De este modo se cambian las prácticas productivas del territorio. De acuerdo con datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 2006 y 2013, por cada víctima de MAP en los municipios afectados se presentó una disminución en el área cultivada de 22,8mts<sup>2</sup> en el siguiente año (CNMH, 2017; p.131). Cultivar, labrar la tierra, arriar el ganado, recoger leña, e incluso recorrer el campo se convierten en actividades de alto riesgo conllevando el abandono de tierras, dejando relegadas las tradiciones que sustentan el modo de vida y afectando las dinámicas de apropiación del espacio.

Estos factores llevaron, en ocasiones, a que los pobladores tuvieran pocas posibilidades aparte de acogerse, por ejemplo, a la producción de cultivos ilícitos, la cual se convirtió en diversos lugares en la principal actividad económica,

redefiniendo las alianzas comerciales y las lógicas de regulación del mercado (Salas, 2015; Roberts y Littlejohn, 2015).

Así, la relación con el territorio comienza a estar mediada por el miedo y la incertidumbre, haciendo que la posibilidad de peligro se convierta en el principal referente de los espacios. La multiplicidad de artefactos explosivos utilizados, la variedad de mecanismos de activación y la facilidad para ponerlos en diferentes lugares llevan a acabar todas las referencias de seguridad en el espacio. La sola sospecha de estos artefactos altera la relación y el sentido del territorio de quienes lo habitan, lo cual para la comunidad es una ruptura con su cotidianidad, sus medios de subsistencia y sus formas de relacionamiento social (MacLean, 2016; Bejarano, 2010; Erling, 2008; Harpviken y Roberts, 2004).

En este sentido, las personas pierden la tranquilidad al desempeñar acciones cotidianas perturbando su manera de estar en el mundo como individuos y como comunidades. El espacio se hace menos habitable y, por lo tanto, menos público, lo que implica que bienes de acceso libre como las plazas, las carreteras y las escuelas, se destierran de los andares cotidianos, disminuyendo también las posibilidades de comunicación y asociación con los otros miembros de la comunidad (Ibarra, 2016; Mejía, 2016; Aguilar, Sánchez, Cruz y Torres, 2014; Hofman, 2006).

En palabras de una habitante de Vistahermosa:

Este camino estaba minado, ¡esto era un peligro! Cuando yo mandaba a mi hijo al colegio le decía que no se fuera a salir del camino, que si quería orinar o tenía que hacer popó o algo así lo hiciera ahí en la mitad pero que no se le ocurriera alejarse del camino porque uno no sabía que podría haber por ahí (Habitante de Alto Guapaya, vereda del municipio de Vistahermosa, Meta, comunicación personal, 2018).

Como demuestra el testimonio, esto tiene además una afectación particular en los niños; por un lado, afecta gravemente su acceso al derecho de la educación ya que, al ser usadas en ocasiones como resguardo por parte de las tropas militares, las minas también fueron sembradas cerca de escuelas y colegios, poniéndolos en posición de especial vulnerabilidad. De hecho, los datos del mismo informe del

Centro Nacional de Memoria Histórica muestran que la presencia de minas generó entre 2006 y 2013 un alto nivel de deserción escolar: en promedio por cada víctima anual en un municipio determinado hubo una disminución de 30,5 estudiantes matriculados el siguiente año (CNMH, 2017; p.139).

Por el otro lado, la relación de los niños y niñas con el territorio y los procesos por los cuales experimentan el mundo se transforman. La curiosidad de los niños los hace especialmente vulnerables a recoger de los caminos remanentes explosivos de guerra como municiones, granadas e incluso artefactos explosivos improvisados que estallan al cogerlos (CNMH, 2017b; Katherine Otálora, comunicación personal, 2018). De esta forma se pasa de tener un mundo por conocer a la obligación de tener una relación de distancia con los objetos que lo componen.

Las restricciones en la movilidad generan sensaciones de inseguridad, aislamiento y desconfianza entre los pobladores, a tal punto que es frecuente encontrar el desplazamiento forzado como consecuencia de la siembra de minas en un determinado territorio (CNMH, 2017; DNP, 2009; Corte Constitucional, 2008). Este también se produce como resultado de muertes en atentados por MAP:

Además, allá ponían de esas minas que tenían como activación a distancia y si ellos veían que era una persona por decir algo, específica las detonaban. Así le pasó a un muchacho que luego de un tiempo, él era muy juicioso, y todos lo conocían acá, pero luego se metió al Ejército y todos sabían cuando iba pasando por allá en un carro y apenas pasó “bum” detonaron esa cosa y lo mataron, porque era del Ejército y eso se sabía que allá tenían de eso, la familia de él toda se fue (Habitante de Vistahermosa, Comunicación personal, 2018).

Sumado a esto, la siembra de minas estuvo frecuentemente acompañada de la “información a cuentagotas”, es decir, los grupos armados informaban a unos pocos habitantes sobre los sitios donde se encontraban las minas, pero el compartir esa información se asumía como “colaborar con el enemigo”. De esta manera se instrumentaliza a la población y al tiempo se fomenta una profunda desconfianza al romper la posibilidad de crear estrategias colectivas de protección (CNMH, 2017, Scheu, 2004; Skara, 2003).

### 3.3 Vivir a costa del riesgo

Si bien las minas logran ser un método muy eficiente de control territorial, los habitantes siguen utilizando su espacio para realizar, de la manera en que puedan, las actividades económicas, productivas e incluso culturales que le dan sustento a sus vidas. Por esto se ven en la necesidad de recurrir a ciertas prácticas que, a pesar de ser riesgos constantes, se convierten en estrategias de supervivencia que permiten tener un mínimo grado de control sobre sus desplazamientos en el territorio tal como se expresa a continuación:

[En los talleres de ERM] es muy común lo que dicen de “yo mando primero a mi perro y si él pasa yo paso” pero el animal tiene otro peso, o pudo haber pasado un poco más al lado de la mina, no siempre significa que el territorio esté libre (Katherin Otálora, comunicación personal, 18 de abril de 2018).

Que antes uno tenía que moverse como todos en filita donde uno sabía que se había estallado una cosa de esas, ¡ay no!, eso siempre daba un susto, entonces uno trata de no pasar por ahí, pero uno necesita hacer sus cosas de todos modos, ¿si me entiende? (Habitante vereda Alto Guapaya, comunicación personal, 2018).

Estas formas de sobreponerse al contexto ponen a los pobladores en situaciones de alta vulnerabilidad. Ejemplo de esto es el “desminado artesanal”; que consiste en que miembros de la comunidad se encargan de remover, señalar o tapar las minas y los remanentes de guerra que hay en los caminos o campos de cultivo (Bottomley, 2001). Lo siguientes relatos demuestran que, aun reconociendo el riesgo, estas actividades se vuelven parte del repertorio de respuestas para poder continuar con la vida cotidiana.

Una persona nos contó que se encontró muchos casquillos de bala que esos son municiones sin explotar, y él nos contó que hizo un hueco en la tierra, las cogió todas y les echó sal para que no tuvieran efecto y eso es mentira porque la sal no disminuye el efecto que puede tener el artefacto. (...) durante los talleres de ERM, de educación, ellos de una vez empiezan a hablar de los mitos y no falta la persona que levanta la mano y diga “ay no, pues yo tengo una granada en mi casa” (Katherin Otálora, comunicación personal, 2018).

Cuando uno encontraba una mina por ahí lo que uno hacía era dejarla ahí y avisarle a la gente que había algo raro y dónde se había encontrado, pero igual uno iba por gasolina o algo que a uno lo ayudara a quemar eso para que estallara y uno ya pudiera pasar tranquilo. Pero eso era si uno era muy valiente y veía que podía hacer algo para quitarla, porque hay otras que ni se ven (Habitante de Alto Guapaya, comunicación personal, 2018).

Los habitantes recurren a este tipo de práctica por el desfase que hay entre la necesidad de usar los terrenos y el tiempo que demora una respuesta organizada por parte de los organismos a cargo del desminado, especialmente cuando se necesitan liberar parcelas de cultivo o caminos de tránsito frecuente (Bottomely, 2001).

Los efectos que se mencionan hasta al momento han afectado a 31 de los 32 departamentos del país y han profundizado situaciones de injusticia social y espacial, generando un quiebre en las tradiciones y las interacciones entre personas (López, 2013). De esta manera, la violencia se configura como un despojo de ciudadanía en tanto coarta la posibilidad de habitar y participar de lo público, destruyendo los recursos necesarios para presentar una respuesta colectiva y minando la confianza frente a las respuestas de entidades estatales. Es por esto por lo que la paz debe asumirse como un espacio de construcción de capacidades para dar respuesta a estos escenarios.

#### CAPÍTULO IV. DESCONTAMINANDO EL TERRITORIO, BUSCANDO LA PAZ

En un principio el problema de las minas antipersonal era considerado solamente en relación con los objetos físicos que tenían que removerse y destruirse, sin tener en cuenta los procesos sociales, económicos y psicológicos que se desencadenaban a raíz de su presencia en los territorios (Skara, 2003). Al pensarse en el marco de la ayuda humanitaria se asociaban como procesos de respuesta inmediata y de corta duración. Las organizaciones de nivel internacional que llevaban a cabo estas tareas usaban procedimientos adaptados de las perspectivas militares cuyo éxito estaba medido únicamente por la cantidad de kilómetros cuadrados despejados (Berg Harpviken y Millard, 2003; Berg Harpviken y Skara, 2003).

Sin embargo, la evaluación de impactos desde sus efectos a nivel comunitario llevó a un cambio de visión. De un accionar distante frente a los procesos locales y centrado en los aspectos de seguridad, se pasó a un enfoque de “hacer el bien” en

las comunidades, involucrando sus perspectivas en los procesos y procurando que los territorios limpiados se reapropiaran. Esto permitió ligar las consecuencias del desminado a aspectos como el fortalecimiento a la sociedad civil, la reconciliación, y la visibilización de injusticias colectivas (Roberts y Littlejohn, 2005; Berg Harpviken y Roberts, 2004; Berg Harpviken y Skara, 2003).

De este modo se convierte en una actividad fundamental dentro de una estrategia integral de transformación de conflictos, tanto desde una visión a corto plazo como desde una visión a largo plazo. Es decir, estas actividades comenzaron a percibirse como parte de una progresión: el desminado humanitario es una respuesta a una crisis particular provocada por el conflicto cuya medición de éxito se realiza a partir de indicadores inmediatos, pero se inscribe a largo plazo dentro de lo que Lederach considera las “laboriosas tareas de construir relaciones y confianza, y de diseño y preparación del cambio social, todo lo cual proporciona una base para la transformación sostenible del conflicto” (Lederach, 2009, p. 107).

En consecuencia, el objetivo a corto plazo del desminado humanitario es que los habitantes de un lugar puedan volver a caminar libremente, que puedan acceder a recursos como el agua, la educación y la tierra, y se mejoren sus condiciones de vida. Pero a largo plazo busca contribuir fortalecimiento de las relaciones con las comunidades, permitiendo establecer una infraestructura que abarque todos los niveles de la sociedad, potenciando sus recursos en torno a la reconciliación, esto puede llevar a un equilibrio entre la contribución externa y la participación local tal como lo teoriza Lederach (2016).

Es por esto, además, que el cambio de visión implicó reconocer la necesidad de tener una población civil más activa que debía ser tomada en cuenta a partir de modelos flexibles y adaptables a los distintos usos, discursos y representaciones del territorio (García, 2006; Millard, 2003).



#### **4.1 El panorama del desminado humanitario desde la política pública nacional**

En 1997 se llevó a cabo en Oslo la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, donde se realiza el acuerdo conocido como Tratado de Ottawa. En él, las partes firmantes se comprometen a suspender el uso, fabricación, compra y venta de minas antipersonal, la destrucción de las reservas de estas armas y la descontaminación de su territorio.

Este tratado fue ratificado por el Congreso de Colombia en el 2002. Desde ese año, se entrenaron batallones en tareas de desminado y se inició el proceso de limpieza de las bases militares. En 2007, estos batallones inician procesos de desminado humanitario en San Carlos (Antioquia) y El Dorado (Caldas). Sin embargo, aunque a remoción de las minas represento un gran avance para mejorar las condiciones de estas comunidades, las dinámicas del conflicto armado se mantenían, por lo cual la presencia del Ejército en estas zonas podía representar una forma de poner en riesgo a las poblaciones, al ser percibidas como colaboradoras de uno de los actores armados del conflicto (Ibarra, 2016).

Desde ese mismo año, varias organizaciones internacionales con liderazgo en temas de Acción Integral Contra Minas Antipersonal como The Halo Trust, Handicap International, Ayuda Popular Noruega y Danish Demining Group, se establecieron en el país para adelantar campañas en educación en riesgo de minas, acompañamiento a víctimas y desarme.

Con este panorama se comienzan a crear marcos de Acción Integral Contra Minas Antipersonal el país que buscan incluir a la población civil. Sin embargo, al revisar la legislación alusiva al tema, son pocas las luces que se dan para asegurar que haya una colaboración permanente con las personas de los territorios. En el Conpes 3567 de 2009, “Política Nacional de acción integral contra minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados”, se menciona que:

[S]on las comunidades receptoras, integradas por víctimas de la violencia y población en situación de discapacidad, *sobre* las cuales se hace necesario construir *procesos de inclusión efectiva* para garantizar el pleno goce de sus derechos (DNP, 2009) (resaltado propio).

Así mismo asegura que un punto focal de la política es la articulación entre la nación y el territorio que se verá fortalecida a través de la descentralización institucional para que las intervenciones en terreno sean acordes a las características de afectación de cada zona. Para esto, propone la inclusión de la problemática de minas antipersonal en los planes locales de desarrollo.

Por su parte, el Conpes 3723 de 2012, profundiza en que la política de Acción Integral Contra Minas parte de un enfoque de derechos que permita mayores oportunidades de acción para la gente buscando que las minas antipersonal dejen de ser un impedimento para el desarrollo humano de las poblaciones (DNP, 2012).

Sin embargo, el mayor avance en el tema de desminado se da en el 2015, cuando se logró llevar este tema a la Mesa de Negociaciones de La Habana, donde surge el Acuerdo sobre Limpieza y Descontaminación del Territorio de la presencia de Minas Antipersonal (MAP), Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) y Municiones Sin Explotar (MUSE) o Restos Explosivos de Guerra (REG) en general.

Este acuerdo sirvió para dar fuerza al proceso de paz al demostrar que se tomaban medidas para garantizar la seguridad de las personas en el país, y que se estaban reduciendo las tensiones entre las partes del conflicto, ya que el proyecto piloto en las veredas Orejón en Briceño-Antioquia, y Santa Helena en Mesetas -Meta contó con la participación conjunta de miembros de las Fuerzas Armadas y combatientes<sup>9</sup> de las FARC-EP bajo la guía de la APN (Mesa de Conversaciones, 2015). El ejercicio

---

<sup>9</sup> El 19 de mayo se expidió el Decreto 1019 de 2015 por medio del cual se dictan las disposiciones para su implementación, la cual inició el 20 de mayo. Al ser parte de las medidas de desescalamiento, este proyecto se llevó a cabo mientras se realizaba la negociación, en medio de un cese al fuego unilateral decretado por las FARC-EP. Ver más: Presidencia de la República.  
<http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%201019%20DEL%2019%20DE%20MAYO%20DE%202015.pdf>

permitió crear una relación de confianza entre antiguos enemigos y mostró ante la población civil un ejemplo de trabajo conjunto y reconciliación nacional.

Más allá de su impacto en las negociaciones, el objetivo de crear el Acuerdo Especial en palabras de Álvaro Jiménez, director de la Campaña Colombiana Contra Minas, era poner en el centro de la discusión a las comunidades vulnerables que estaban sufriendo una terrible amenaza. El acuerdo era una forma de mostrarles que importaban, que se estaban tomando medidas para mantenerlos a salvo (Álvaro Jiménez, parafraseo de comunicación personal, 18 de abril de 2018).

La implementación de este acuerdo llevó a que las organizaciones civiles mencionadas anteriormente tramitaran los permisos para iniciar tareas de desminado, al igual que organizaciones nacionales como la CCCM, Colombia sin Minas y la Asociación Colombiana de Técnicos y Expertos en Explosivos e Investigadores de Incendios (Descontamina Colombia, s.f). La presencia de organizaciones nacionales representó una ventaja dado el trabajo continuo que existe con las comunidades y la centralidad que les otorgan a los procesos de construcción de capacidad local (Camilo Fagua, promotor de derechos humanos, comunicación personal, 2018).

Aunque en el Acuerdo Final el desminado se menciona tangencialmente como una actividad priorizada para la reinserción de combatientes y una alerta respecto a la seguridad de los pobladores de las zonas con cultivos ilícitos, tanto el Acuerdo Especial como la actual política de desminado se encuentran ligados a lo que se denominó como paz territorial. Este enfoque aboga por la priorización de las regiones más afectadas por el conflicto, y la articulación entre una institucionalidad fortalecida y la movilización de la población de estos territorios en torno a la paz (Jaramillo, 2014).

Este énfasis en la participación comunitaria se ve claramente en el Plan Estratégico de Acción Integral contra Minas Antipersonal 2016- 2021:

La Acción Integral contra Minas Antipersonal se entiende como una acción humanitaria (es decir, orientada a la protección de los civiles), con carácter integrador de la institucionalidad y de las capacidades nacionales. Así, es concebida como un proceso incluyente, que requiere del trabajo conjunto de los actores de la comunidad AICMA, la comunidad en general y las autoridades territoriales y que, en este sentido, promueve el diálogo, la participación efectiva de las víctimas y las comunidades, y demás actores interesados. A su vez, la implementación de la AICMA facilita las acciones de desarrollo socio económico, al eliminar o reducir las restricciones causadas por la presencia de MAP y MUSE en los territorios (Descontamina Colombia, 2016; p.21).

En este sentido, sostiene que la gestión de información tiene que hacerse de la mano con los territorios, para lo cual se hace necesario la creación de “nuevos espacios de participación en el nivel territorial” de manera que se dé una “construcción deliberativa” de la forma en que se debe consolidar la paz en su territorio (Descontamina Colombia, 2016).

La participación de la sociedad civil es relevante a lo largo de todo el proceso de desminado por varios factores: por un lado, el cambio de enfoque sobre los procesos de desminado humanitario llevó a comprender que existen lugares estratégicos para la comunidad que hacen necesaria una priorización de las zonas de intervención, y son ellas quienes tienen mayor conocimiento sobre los diversos tipos de minas que los actores armados implantan en el territorio (Skara, 2003).

Que la población esté involucrada permite también visibilizar la forma en que las poblaciones se adaptan a la presencia de estos artefactos y las principales necesidades que deben ser respondidas en articulación con las demás instancias gubernamentales, de forma que se apropien de los procesos para mejorar su comunidad (Erling, 2008).

Estas colaboraciones se recogen a través de los estudios no-técnicos en los cuales los habitantes de la zona señalan los sitios de mayor riesgo: donde han ocurrido atentados o existe sospecha de presencia de MAP. Luego se realiza un estudio técnico que define los parámetros para determinar la presencia de minas en los sitios indicados por la comunidad y finalmente se realiza el despeje (Descontamina

Colombia, 2016). A partir de esta información los municipios se clasifican y priorizan según el nivel de sospecha de contaminación por minas (ver anexo 2).

Si bien la implementación ha sido reciente, los resultados son esperanzadores. A través de la revisión de información cualificada y ejercicios de desminado humanitario se han declarado 322 municipios libres de sospecha de minas, lo que representa el 48% de los municipios del país, (110 de ellos gracias a operaciones de desminado humanitario<sup>10</sup>) y 6.495.352 metros cuadrados, de un total de 52 millones de metros cuadrados estimados de contaminación (Descontamina Colombia, 2018b).

Sin embargo, aun cuando el reporte de 2016 de Landmine Monitor resalta que no ha habido nuevos usos de MAP en el país, luego de la firma del Acuerdo de Paz han existido reportes de incautación y siembra por los grupos armados organizados que permanecen actualmente en el territorio: el ELN, las bandas criminales y las disidencias de las Farc (RCNradio, 2018; EIColombiano.com, 2018; Insightcrime, 2013). Como se mencionó anteriormente, el desminado puede resultar inseguro para la población civil cuando hay presencia de actores armados en el territorio al llegar a ser visto como una afronta, en especial cuando se realiza en zonas con recursos como los cultivos ilícitos. Este es uno de los mayores desafíos que se imponen para lograr la meta de descontaminación para el 2021, plazo que se asumió después de que el Gobierno Nacional pidiera una prórroga de diez años para poder cumplir con los compromisos firmados en el Tratado de Ottawa.

#### **4.2 El Caso de la Campaña Colombiana Contra Minas**

En medio de este marco de acción, el trabajo de la Campaña Colombiana Contra Minas ha sido esencial para la construcción de la paz en Colombia. Esta organización se creó en 1999 como parte de una iniciativa ciudadana con el objetivo de erradicar las minas antipersonal en el país. Durante sus dieciocho años de

---

<sup>10</sup> Los otros municipios han sido declarado libres de sospecha de minas luego de realizar Consejos de Seguridad con las autoridades y pobladores de cada lugar y determinar que las MAP ya no representan un riesgo para sus habitantes (Descontamina Colombia, 2018).

trabajo se ha constituido como la organización no gubernamental con mayor experiencia en el campo de la acción humanitaria contra minas, abogando por los temas de desarme a través de procesos de incidencia en políticas públicas. Su reconocimiento en el tema parte de años de trabajo que se centraron principalmente en procesos de acompañamiento a víctimas de minas antipersonal de manera que pudieran acceder a procesos de rehabilitación y reclamar el cumplimiento de sus derechos.

El trabajo de la Campaña se ha dado de la mano de los diferentes avances y coyunturas que se dan internacionalmente desde los diferentes ámbitos de la Acción Humanitaria Contra Minas. De esta manera, las experiencias de desminado en países como Camboya, Afganistán, Mozambique, entre otros y los espacios de comunicación e interacción entre las diferentes organizaciones de desminado, han sido un punto de partida desde el que la CCCM consolidó la metodología de los enlaces comunitarios, ayudando a construir los marcos de implementación del acuerdo de desminado humanitario en el país, y conectando los niveles base de la sociedad con las decisiones que se toman por parte de los líderes de alto nivel.

Para esto, trabaja de mano de instituciones nacionales y locales, asociaciones departamentales de sobrevivientes y otras organizaciones relevantes a nivel de liderazgo comunitario, con quienes se articula en una red de coordinadores y voluntarios en veintidós departamentos. De esta manera pretende contribuir al desarrollo comunitario, reduciendo las amenazas a la seguridad por armas que son espacialmente crueles e indiscriminadas (MAP, armas nucleares y drones asesinos), mediante la educación en riesgo, apoyo a sobrevivientes, limpieza del territorio, incidencia política y gestión territorial.

Por lo tanto, su caso es importante para analizar los ejes de coordinación que permiten establecer puentes de contacto entre los líderes políticos y militares, y los ciudadanos que son la base del esfuerzo para la consolidación de una paz estable según la teoría de transformación de conflictos (Lederach, 2007, p.127).

#### **4.2.1 Incidencia como organización.**

Un año luego de su creación, la CCCM se vinculó a la Campaña Internacional para la prohibición de las Minas Antipersona. Con este apoyo comenzaron un proceso de presión política que logró en el 2002 la ratificación del Tratado de Ottawa y el comienzo del desminado en las bases militares (Álvaro Jiménez, comunicación personal, 2018).

Eso fue algo muy importante, pero las guerrillas, los paramilitares, los grupos que seguían en los territorios sembraban minas. Entonces vimos la necesidad de también intentar trabajar desde las comunidades buscando formas de hacer pequeños acuerdos con los actores armados para que respetaran ciertos espacios o desminaran lugares de recreación o de recursos que eran importantes para las personas. Sobre todo, era el caso de las escuelas y de los caminos para poder llegar a ellas (Álvaro Jiménez, comunicación personal, 2018).

Esto se desarrolló junto a procesos continuos de acompañamiento a víctimas de MAP y MUSE, y educación en riesgo de minas. Incluso, mediante la incidencia en espacios locales, se logró que la ERM se incluyera en el currículo escolar en algunas de las escuelas y colegios de las zonas más afectadas en el país.

Así mismo, desde que se hizo público el proceso de negociación entre el Gobierno y las FARC-EP en La Habana en septiembre de 2012, la CCCM buscó priorizar un acuerdo especial de desminado humanitario que permitiera dar inicio a estas labores antes de la firma final. Con los datos que tenían sobre incidentes de minas a lo largo del territorio nacional, priorizaron 70 lugares que presentaban un alto nivel de riesgo para la población por la presencia de estos explosivos y lograron el compromiso del trabajo conjunto en las veredas del Orejón en Briceño, Antioquia y Santa Helena en Mesetas, Meta.

De esta forma se convirtió en un referente del trabajo de Acción Humanitaria Contra Minas en el país, y actualmente tiene un alto nivel de participación en las instancias decisorias de la política pública de desminado humanitario. Sus vínculos con campañas internacionales, y la forma en que estructuran su trabajo en la comunidad

son un ejemplo de cómo la CCCM ha sido una parte focal de la red de líderes y organizaciones vinculadas a temas de desminado humanitario (Ver anexo 3)<sup>11</sup>.

#### **4.2.2 La metodología de enlace comunitario.**

Precisamente, esta metodología parte de reconocer y desarrollar las capacidades de los pobladores de cada zona en torno a estos temas, teniendo en cuenta que los líderes comunitarios que sirven de enlace comunitario cuentan con un conocimiento particular del contexto y un mayor grado de confianza en los territorios.

El enlace comunitario es una figura, una persona o un grupo de personas, que entran en el territorio antes durante o después de que una campaña u organización quiera realizar una actividad como el desminado humanitario. El objetivo es realizar un puente entre la comunidad y la organización para generar un tejido de confianza: que la comunidad sienta que no se llega a invadir su territorio, sino que se tiene el objetivo a largo plazo de entregarles esas tierras libres y que se pueda generar algo productivo para ellos, que se puedan poder aprovechar esas tierras que antes se encontraban muertas o que generaron desplazamiento (Katherine Otálora, comunicación personal, 2018).

El trabajo que ha desarrollado la CCCM en veintidós departamentos permite que tengan coordinadores y personas que han trabajado previamente con organizaciones del territorio que pueden cumplir este rol. Así, el reconocimiento de las demandas de los pobladores se constituye como nuevo factor de integración como lo demuestra su protagonismo en los procesos de definición de las zonas prioritarias de intervención.

La participación comunitaria a lo largo de los procesos de desminado permite establecer una base de relacionamiento en la que se afirme que la opinión y el compromiso de los habitantes son fundamentales para el ejercicio de las nuevas gestiones organizadas alrededor de la paz, participando de la construcción de una base local que trabaje por la construcción de una paz estable (Lederach, 2009). Aunque esto no es garantía directa de las actividades de la CCCM en torno a la

---

<sup>11</sup> El Anexo 3 muestra un esquema básico de las redes que se tejen de acuerdo con el modelo de trabajo que tiene la organización. En esta medida, el flujo de las flechas reconoce que se concentra el trabajo en la consolidación de relaciones de confianza y participación con las bases, para poder dar visibilidad a sus necesidades en las instancias nacionales e internacionales.



limpieza del territorio y la atención a las víctimas, tienen como el centro de su propuesta hacer ver a los pobladores de una zona que sus experiencias son tenidas en cuenta, y sentar un precedente de respeto y reconocimiento de su dignidad, poniendo sus necesidades como un punto importante de la agenda del país.

Esta participación, sin embargo, tiene que enfrentarse a los retos que representan las razones de desconfianza que tienen los pobladores frente a las intervenciones de diversas organizaciones en el territorio:

A la comunidad le lleva mucho tiempo tener la confianza en la organización porque siempre tienen esa perspectiva de que vienen con el gobierno, vienen a robarnos, solo vienen acá por su tierra y vuelven y se van, entonces eso es muy difícil (Katherine Otálora, comunicación personal, 2018).

En esta medida, se vuelve necesario reconocer los factores de desconfianza entre individuos y comunidades y hacia el Estado (Moreno, 2018). A partir de esto se fortalecen los espacios en los que participa la sociedad civil, buscando que las nuevas redes que se crean constituyan capitales colectivos que permitan el acceso a las instituciones estatales y fortalezcan las instancias de participación política (Sztompka, 2000). En este contexto, se hace necesario buscar instancias de construcción de confianza que partan de la interacción directa como punto desde el cual coordinar acciones a futuro.

La confianza se construye en esos espacios así, en actividades normales. En el Meta, por ejemplo, estaban organizado un torneo e invitaron a la Campaña a hacer un partido amistoso. Se organizó un grupo de doce mujeres jugando. Así, en actividades que inviten los pobladores o las autoridades locales o las JAC y se crea que puede participar sin afectar a la comunidad, se hace (Katherine Otálora, comunicación personal, 2018).

Así, el desminado, al ser una medida que tiene un impacto directo y visible en la población, se convierte en uno de los primeros anclajes de la construcción de confianza institucional. Los canales que se abren para la participación directa de las personas en las distintas actividades con Campaña y la forma en que se vinculan a través de esta organización a instancias decisorias nacionales y campañas a nivel internacional, son una muestra de la construcción de una institucionalidad que va

de la mano con los procesos de atención humanitaria de urgencia que surgen como prioridad luego de un Acuerdo.

La Campaña además comparte zonas de trabajo a nivel nacional con otras organizaciones que desempeñan labores de desminado, de atención psicosocial a víctimas y de derechos humanos. En estas ocasiones se vuelve fundamental la capacidad de tener una articulación pueda ampliar la forma en que se responde a las coyunturas de un determinado territorio.

El reto se presenta, sin embargo, en las ocasiones en que quienes llevan a cabo las actividades de desminado pertenecen a las Brigadas Militares o a la Infantería de Marina, ya que para la Campaña establecer una relación cercana de cooperación puede significar perder la confianza de la comunidad y su carácter de actor imparciales (Katherine Otálora, comunicación personal, 2018); este factor es de gran peso si se tiene en cuenta que actualmente más de la mitad de zonas asignadas a desminado humanitario están a cargo de organizaciones militares (Descontamina Colombia, 2018).

Esto demuestra que existe un esfuerzo consciente por establecer y estrechar los vínculos con otras organizaciones tanto estatales como civiles que puedan mejorar la implementación de los programas o la prestación de asistencia a la población, pero lo que se mantiene en el centro es la necesidad de fortalecer los lazos con la comunidad directamente implicada.

El fundamento de la Campaña es la construcción de capacidades locales, lo cual pasa también por entrenar y emplear directamente a los habitantes para que desarrollen el desminado y realicen los talleres de ERM. Esto tiene varios propósitos: por un lado, estimular la economía de la zona, ya que los implementos de papelería, herramientas, la alimentación, y el alojamiento se coordinan con la comunidad local para que exista una inversión directa en el territorio a la par que se dan las actividades de desminado (Katherine Otálora, comunicación personal, 2018). Además, al ser trabajadores

locales, el sueldo de los trabajadores se invierte localmente ayudando a revivir alternativas comerciales (Berg Harpviken y Skara, 2004).

Por otro lado, el que vecinos de veredas cercanas compartan espacios y actividades alrededor de una tarea de interés colectivo, permite fomentar la cohesión social, proporcionando espacios para que se recupere la comunicación entre las personas. De esta manera, se crean oportunidades de socialización que aumentan el capital social de las personas, siendo al mismo tiempo un mecanismo para que se asuma un compromiso propio con el mantenimiento del territorio (Skara, 2003).

A pesar de esta voluntad, uno de los testimonios recogidos da cuenta de que no siempre el proceso de contratación facilita estos encuentros de manera directa y, por el contrario, excluir a personas de ciertas zonas puede profundizar los sentimientos de apatía frente a los programas que se intentan implementar en cada lugar.

Yo sé que con los que están haciendo el desminado por allá antes hubo un problema porque cuando comenzaron a coger gente para trabajar, todos fueron de la misma vereda, sabiendo que hay otras personas de otras zonas que también necesitan el trabajo. Entonces al principio se dijo que por qué todos habían salido de ese sector si es que se iba a trabajar una zona más grande, pero pues explicaron que sí, que de pronto había sido un error no hacer el proceso más amplio pero que necesitaban era comenzar a capacitar rápido a la gente y se quedó en eso (Habitante de Vistahermosa, comunicación personal, 2018).

Por eso, la transparencia institucional es uno de los aspectos más importantes para lograr articular a los actores locales, de nivel medio y alto, en torno a los procesos de construcción de paz. Este aspecto se retomará más adelante.

#### **4.2.3 La institucionalización nacional de la metodología de enlace comunitario.**

Por su experiencia acumulada, la Campaña Colombiana Contra Minas es la encargada de manejar el Diseño y la implementación de un esquema a nivel nacional, departamental y municipal de intervención de AICMA en el país. El modelo se basa en una institucionalización de la metodología de enlace comunitario que han adelantado durante estos años y busca relacionar directamente los ejercicios de desminado con el desarrollo socioeconómico y sostenible de las comunidades a

través de la formulación participativa de planes locales de acción contra minas. De este modo se busca que sea adaptable a contextos concretos donde se reconozcan los usos culturales y ancestrales de la tierra y el territorio (ver anexo 4).

Actualmente este esquema se está comenzando a implementar en 60 de los municipios con mayor afectación. Aunque se encuentra en etapas iniciales, se pretende que, de darse una buena coordinación con las autoridades locales y los espacios de base, estos planes vayan acompañados de soluciones integrales a largo plazo tales como propuestas de empleo, emprendimiento, infraestructura, justicia salud y educación (Álvaro Jiménez, comunicación personal, 2018).

Sin embargo, es precisamente la coordinación con las alcaldías y otras organizaciones públicas las que han representado mayores desafíos, dado el bajo nivel de interés que existe frente al tema, las limitaciones presupuestales, y la falta de personal especializado que pueda desempeñar el rol de enlace dentro del esquema. A pesar de que los coordinadores departamentales buscan espacios en la agenda pública para discutir las matrices de los problemas y la forma de incluirlos en los Planes de Acción Municipal, suele ser difícil obtener el tiempo necesario dentro de las reuniones (Álvaro Jiménez y Katherine Otálora, comunicación personal, 2018).

La metodología también enfatiza la construcción de capacidades locales mediante el acompañamiento a la comunidad en procesos de incidencia política a escala directa. Este tipo de iniciativas están ligadas a los coordinadores de la zona, que son habitantes del municipio, como una forma de anclar los procesos y sortear los cambios de alcaldes. De esta forma se promueve una discusión inclusiva sobre el uso y la forma en que se conciben los espacios.

Mediante esta metodología se crean redes flexibles con una base sólida territorial, pero que a la vez potencialicen su capacidad de acción mediante las conexiones interdependientes, y coordinadas con otras instancias estatales o de la población

civil. De manera que sus conocimientos y recursos propios sean el punto de partida para anclar las redes a su contexto particular, tal como lo propone Lederach (2016).

#### **4.2.4 Los cambios que se producen en el espacio.**

Como se mencionó anteriormente, las MAP son objetos artificiales que se fabrican y se localizan intencionalmente para crear un orden espacial particular, y que al permanecer en los territorios incluso después de cambiar el contexto por el cual fueron sembrados, mantienen los límites en las acciones de las personas y condicionan sus prácticas. Esto profundiza las condiciones de marginalidad en la que se encuentran estos municipios, que suelen ser zonas de frontera agrícola sin una presencia fuerte de las autoridades o los programas estatales (Campuzano, 2017). Es por esto, que la forma en que el desminado humanitario interviene directamente en el espacio tiene unas consecuencias particulares en la construcción de la paz.

La más clara es la destrucción de límites fijos que impiden a la población hacer uso del territorio y circular por él libremente de acuerdo con sus necesidades y tradiciones, lo que se traduce en una ampliación de la capacidad de acción de las comunidades y en una mejora en el acceso a recursos que ellos mismos han priorizado dentro de su territorio.

Aquí cobran sentido las ceremonias de entrega simbólica del territorio que se llevan a cabo una vez se han realizado todos los procedimientos que llevan a declarar una zona libre de sospecha de minas. Precisamente buscan revertir la sensación de dominio territorial por parte de los actores armados y generar un marco emocional por medio del cual las personas comiencen a reevaluar el territorio como algo que les pertenece, que es suyo para usar y en esa medida es suyo para construir (Katherine Otálora, comunicación personal, 2018).

Además, se da un cambio en las prácticas del territorio mediante los comportamientos que se recalcan en los talleres de ERM. De esta forma, se busca que la recuperación de tradiciones y costumbres se dé en el marco de

comportamientos que permitan a las personas desarrollarse con mayor seguridad en su ambiente cotidiano, perdiendo el miedo vinculado al territorio.

Es también importante notar que aquello que se recupera suelen ser espacios que se experimentan y viven de forma colectiva, incluso cuando los terrenos hacen parte de delimitaciones privadas. Es decir, los caminos, los sitios de recreación, los descansos, las escuelas e incluso las fincas, suelen ser lugares donde se propician diariamente interacciones que fueron sacadas de lo público a causa de las dinámicas de violencia. De esta manera, las tierras liberadas son además nuevos espacios de encuentros que puedan recomponer ciertos sentidos territoriales y lazos sociales proporcionando un nuevo marco para el encuentro y la socialización (Alguacil, 2008).

El tener un nuevo referente de territorio en que se sustituya la incertidumbre por una progresiva recuperación de la familiaridad con el espacio, ayuda a tener un referente de lo que Sztompka (2000) refiere como las condiciones estructurales que permiten la creación de una cultura de confianza. Si bien las personas encuentran formas de readaptarse al territorio y apropiarlo aún en presencia de las minas, la entrega de los terrenos descontaminados contribuye a compartir paulatinamente los espacios que se convierten así en plataformas de comunicación y facilitan la reconstrucción de lazos sociales y con el espacio, lo que ayuda a fortalecer los sentidos de identidad, solidaridad y cohesión social (Flores, 2007, Valencia, 2001).

Tanto como espacio físico y como espacio relacional, la construcción de lo público es referente para la elaboración de las reglas de convivencia entre miembros de una sociedad, ya que es el lugar donde se visibilizan los conflictos, las contradicciones, se crean procesos de discusión y se establecen las dinámicas de regulación social (Valencia, 2001) y de resolución de conflictos.

Al ser una actividad tan reciente, el proceso por el cual las personas vuelven a hacer uso de la tierra como parte de su cotidianidad es demorado. Es por esto, que más allá del espacio particular que se descontamina, la Campaña busca fortalecer lo local a través del apoyo que brinda como parte de los procesos de acompañamiento

a víctimas, a proyectos productivos y comunitarios que se quieran realizar (como proyectos productivos pequeños de huertas o cultivos), o la formalización de organizaciones comunitarias (Katherine Otálora, comunicación personal, 2018).

De allí se deduce que un punto de gran importancia, como se mencionó anteriormente, es la necesidad de transparencia durante el desarrollo de los trabajos de desminado. La transparencia ayuda a fomentar la confianza tanto en las instituciones como en los procesos que llevan a cabo, para incentivar de manera más pronta la reocupación y reapropiación de los espacios que se desminan.

Es necesario mantener la claridad respecto a la entrega de los espacios como libre de sospecha de minas, ya que los mapas que se tienen actualmente no registran dónde se encuentran las minas enterradas sino en dónde se han presentado los atentados. Esto se da porque en muchas ocasiones quienes pusieron las minas han muerto o no pueden recordar la ubicación exacta, además los factores climáticos y temporales pueden cambiar la posición de estas (Campuzano, 2017). Por esto es necesario enfatizar la necesidad de que se mantengan los talleres de emergencia en riesgo de minas para establecer patrones de comportamientos seguros.

Finalmente, se resalta la realización de procesos comunitarios para pensar acerca del futuro de los terrenos que se entregan, aclarando las intenciones económicas, sociales, políticas y militares que hay para evitar sospechas de que se beneficie realmente a proyectos de agroindustria o empresas minero-energéticas y no a la comunidad misma (Camilo Fagua, parafraseo de comunicación personal, 2018).

Es necesario tener en cuenta que el desminado humanitario se piensa en una mayor escala como una herramienta que permita el desarrollo y la inclusión de zonas que han estado marginadas por décadas (Álvaro Jiménez, comunicación personal, 2018). En este sentido, debe buscarse que los espacios que se recuperan a partir de las acciones de desminado sean escenarios para llevar a cabo una reapropiación y no una desviación del espacio (Lefebvre, 2013; p.216), es decir, que mediante las

planificaciones del espacio no se creen diseños y formas pensados de manera ajena a las necesidades cotidianas de las personas que habitan en ellos.

Precisamente, uno de los pilares en los que se sustenta la importancia de tener una organización nacional civil como la CCCM a cargo de la implementación de estos programas es que al conocer el contexto puede

[A]provechar (el desminado) como una oportunidad para generar desarrollo territorial desde un enfoque comunitario que busque garantizar los derechos sociales, económicos, políticos de quienes habitan los lugares donde hubo minas, (...) que (las comunidades) recuperen su proyecto de vida, se reconstruya el tejido social, se recompongan las dinámicas culturales. Que se desmilitarice la vida y tengan unas condiciones dignas (Camilo Fagua, comunicación personal, 2018).

Esto permite entrever que los procesos de desminado están encaminados a la búsqueda de la justicia espacial en la medida en que busca hacer frente a las condiciones de marginalidad que se profundizaron a través del espacio (Soja, 2010), y a la vez busca cambiar por medio de la acción política, la forma en que se planea el espacio de manera que se produzcan mejoras en la calidad de vida, el reconocimiento social y la pertenencia territorial, la dignificación de las personas, la libertad de movimiento, la democratización de las decisiones sobre el territorio, y la apropiación de los nuevos espacios de vida (Álvarez, 2013).

Si bien en las visiones que se han expuesto hasta el momento se vislumbra una clara intención de perseguir este objetivo, no hay estipuladas formas de hacer seguimiento a los usos que se les da a corto, mediano y largo plazo a los espacios descontaminados. Sin embargo, el trabajo y la dedicación a la visibilización de las necesidades locales como parte de la búsqueda de un desarrollo territorial inclusivo promueve que, en un futuro, se logre una influencia decisiva de las comunidades locales en la planeación y el desarrollo de su territorio.

La contribución de la Campaña Colombiana Contra Minas en la construcción de paz se basa en generar una nueva institucionalidad, adaptada a los contextos, que busca fortalecer las capacidades regionales de manera que, a través de la recuperación del territorio, la seguridad y la confianza permita nuevos escenarios



de interacción fortaleciendo la construcción de redes a través de las cuales se promueva la participación efectiva de las comunidades que han sufrido los impactos de la presencia de minas, de acuerdo a sus necesidades, costumbres y tradiciones. Esto se esquematiza en el anexo 5.

## CAPÍTULO V. CONCLUSIONES

La transformación de las relaciones entre las personas pasa también por entender la relación que se mantiene con el territorio y la manera en que la configuración del espacio limita o posibilita la acción de los individuos, contribuyendo o impidiendo el logro de una paz estable. De esta manera, se relacionan los aspectos culturales de la construcción de paz como la consolidación de redes, el fortalecimiento de la confianza y la participación, con aspectos estructurales como el espacio.

Es por esto, que esta investigación buscó comprender cómo los procesos de desminado humanitario llevados a cabo por la Campaña Colombiana contra Minas han contribuido a generar cambios en las relaciones tanto entre las personas como con el espacio, favoreciendo el establecimiento de condiciones propicias para la construcción de paz.

Al cambiar la configuración del territorio mediante la remoción de las minas antipersonal que crean barreras de acceso a recursos e imponen controles a las comunidades, se logra un cambio en la forma en que se presenta y mantiene un orden social determinado en el territorio. En este sentido se afirma que la descontaminación del territorio es uno de los principales pasos en la producción de cambios en las espacialidades que contribuyan al paradigma de la paz territorial.

El retirar las minas permite abrir los pasos, retomar prácticas sociales y culturales que se perdieron con la guerra, y de esta manera reconstruir los hábitos de los sujetos, de manera que el territorio se presente nuevamente como una estructura en la que los habitantes desarrollen su identidad libremente, lo que puede repercutir en los sentidos de identificación social y comunitaria. Esto mejora la

calidad de vida de las personas, crea condiciones propicias para establecimiento de la confianza y espacios de participación que lleven a anclar las políticas de desminado a las visiones locales que tienen las comunidades.

Los ejercicios de desminado humanitario, en cuanto suelen ser la primera intervención directa que se hace luego de los procesos de paz en los territorios, presentan una oportunidad imperdible en la capacidad de acercar a las comunidades con los planteamientos hechos desde los espacios de política pública.

Dado lo reciente de estos ejercicios, lo que aquí se estipula está basado en la combinación de la experiencia acumulada de la Campaña Colombiana Contra Minas en todos los ámbitos de trabajo de la acción humanitaria contra minas, las expectativas de la política pública y las experiencias que se han dado en otros países. Sin embargo, el impacto real que haya en estos aspectos se enfrenta a retos que se escapan del control de estas organizaciones, como las condiciones geográficas de los territorios, las amenazas a la seguridad y a los procesos de desminado que representan los grupos armados organizados que permanecen en algunos lugares, el uso de minas para la protección de cultivos ilegales, la capacidad financiera de los programas nacionales de desminado, las relaciones con los donantes y la capacidad de articulación institucional (Bejarano, 2010).

La estrategia del enlace comunitario propuesta por la campaña Colombiana Contra Minas, que se busca generalizar mediante el Esquema nacional departamental y municipal de intervención de acción humanitaria contra minas, parte del compromiso con la construcción de capacidades locales de manera que sean los pobladores mismos quienes definan las prioridades de descontaminación en su territorio y participen activamente de los espacios de participación política de modo que incidan en la manera en que se estructura y se vive su espacio.

El contar con personal de la comunidad realizando las labores de desminado y la continua participación de los pobladores como educadores y replicadores locales de la información, así como la presencia constante del diálogo en el proceso de

desminado puede contribuir a fortalecer las dinámicas de apropiación hacia el territorio, cohesión social y formación de identidad comunitaria por parte de los habitantes (Berg Harpviken, 2010).

De esta manera, la CCCM propende por la construcción de redes que se adaptan a las necesidades y tradiciones de cada contexto, pero gracias a las cuales se logre mantener una fuerte articulación que, en un futuro, permita establecer una cooperación fuerte entre las autoridades locales, departamentales y nacionales, los líderes comunitarios y las organizaciones de la sociedad civil que están implicadas en estos procesos.

Se busca evitar que la forma de planeación en los territorios se imponga frente a las percepciones que tienen los habitantes del lugar y se construya una sociedad más democrática, que busque además incentivar discusiones y procesos de acción política alrededor de la idea de la justicia para estas zonas que se han mantenido marginadas a lo largo de estos años.

De este modo, se puede entender el desminado no sólo como un aspecto fundamental en las garantías de no repetición y desarme, sino como un elemento profundamente ligado a las dimensiones de reconciliación e incluso justicia al convertirse un medio para una mayor atención estatal y para una verdadera transformación territorial que permita repensar los espacios como un lugar de enunciación y desenvolvimiento de las comunidades a los que pertenecen.

## BIBLIOGRAFÍA

- Alguacil, J. (2008). Espacio público y espacio político. La ciudad como el lugar par estrategias de participación. *Revista de Universidad Bolivariana*, Vol7, no20. Recuperado de: [https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0718-65682008000100011](https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-65682008000100011)
- Álvarez, A. (2013). (Des)Igualdad socioespacial y justicia espacial: nociones clave para una lectura crítica de la ciudad. *Revista Latinoamericana*, Vol12, No36. Recuperado de: <https://scielo.conicyt.cl/pdf/polis/v12n36/art12.pdf>
- Ball, S. (2011). La Implementación de un Programa de Acción Contra Minas en Samaniego como estudio de caso hacia una propuesta desde el enfoque de acción sin daño para aplicar a la Acción Contra Minas en medio de conflicto armado. Trabajo de grado presentado para optar al título de Especialista en Acción Sin Daño y Construcción de Paz. Universidad Nacional De Colombia. Recuperado de: [http://www.bivipas.unal.edu.co/bitstream/10720/574/1/TT-224-Ball\\_Sharon-2011-451.pdf](http://www.bivipas.unal.edu.co/bitstream/10720/574/1/TT-224-Ball_Sharon-2011-451.pdf)
- Ballester, L y Bacual, B. (2014). Redes sociales, políticas públicas y capital social. APOSTA- Revista de ciencias sociales.
- Bejarano, E. (2010). Minas antipersona, su relación con el conflicto armado y la producción de narcóticos en Colombia. Recuperado de: <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/opera/article/view/3109> (experiencias en otros países, relación con narcóticos)
- Berg Harpviken, K y Roberts, R. (2004). Preparing the ground for peace. Mine action in support of peacebuilding. Recuperado de: <https://www.prio.org/Publications/Publication/?x=7321>
- Berg Harpviken, K y Skara, B. (2003). Humanitarian mine action and peace building: exploring the relationship. *Third World Quarterly*, Vol24, No5.
- Berg Harpviken, K. (2003). The future of humanitarian mine action: introduction. Recuperado de: <https://www.prio.org/Publications/Publication/?x=566>
- Berg Harpviken, K. (2010). Breaking new ground: Afghanistan's response to landmines and unexploded ordnance. *Third World Quarterly*, 23:5, 931-943. Recuperado de: <http://dx.doi.org/10.1080/0143659022000028576>

- Berg Harpviken, K; Millard, A; Erling, K y Skara, B. (2003). Measures for mines: approaches to impact assessment in humanitarian mine action. Recuperado de: <https://www.prio.org/Publications/Publication/?x=3098>
- Berg Harpviken, K; y Isaksen, J. (2004). Reclaiming the field of war: mainstreaming mine in action in development. Recuperado de: <https://www.cmi.no/publications/1871-reclaiming-the-fields-of-war>
- Bottomley, R. (2001). Spontaneous demining initiatives. Mine clearance by villagers in rural Cambodia. Handicap International- Belgium.
- Bottomley, R. (2003). Crossing the Divide: Landmines, villagers and organizations. Recuperado de: <https://www.gichd.org/fileadmin/pdf/LIMA/Report-Crossing-the-Divide-Landmines-Villagers-and-Organizations.pdf>
- Camacho, A. (2001). Democracia, exclusión y construcción de lo público en Colombia. En: Valencia, A (Ed.). Exclusión social y construcción de lo público en Colombia. Universidad del Valle.
- Campaña Colombiana contra las Minas (2011), Problemática de los erradicadores manuales de cultivos ilícitos víctimas de minas antipersonal, disponible en <http://colombiasinminas.org/wpcontent/uploads/2011/06/Problematica-de-los-erradicadores-con-anexos.pdf>
- Campuzano, C. (2017). Desminado humanitario como forma de reinserción socioeconómica en los países de Laos y Colombia objeto de violencia política. Recuperado de: <http://revistas.curn.edu.co/index.php/aglala/article/view/1025/804>
- Canal1.com.co. (2018). Autoridades incautaron caleta de mians antipersonal de alias 'Guacho'. Recuperado de: <https://canal1.com.co/noticias/autoridades-incautaron-caleta-minas-antipersonales-alias-guacho/>
- Castaño, O. (2013). Conflictos armados y construcción de paz. De la teoría a las políticas internacionales de paz en la posguerra fría. Ra Ximhai n.9, mayo-agosto. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46127565004>
- Ceballos, M., y Martín, G. (2001). Participación y fortalecimiento institucional a nivel local en Colombia. Bogotá: Centro Editorial Javeriano.
- Centro Nacional de Memoria Histórica y Fundación prolongar. (2017). La guerra escondida. Minas antipersonales y remanentes explosivos en Colombia, CNMH, Bogotá.

Corte Constitucional Colombiana (2008), “Auto 093, Protección de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la seguridad personal, a la libertad de circulación, y a la prevención de las circunstancias que generan desplazamientos forzados, de las personas civiles del municipio de Samaniego (Nariño) afectadas por el problema de minas antipersona y ubicadas en consecuencia en alto riesgo de desplazamiento forzado, o de desplazamiento forzado efectivo, MP Manuel Cepeda Espinosa”.

Cuartas, G. (2014). La guerra como práctica de adecuación de los lugares. *Criterio Jurídico Garantista*. 8ene-jun-2014). Año 6, no 10.

Departamento Nacional de planeación. (2009). Conpes 3567. Política Nacional de acción integral contra minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados. Recuperado de:  
[http://portalterritorial.gov.co/apc-aa-files/40743db9e8588852c19cb285e420affe/Conpes\\_3567\\_de\\_2009.pdf](http://portalterritorial.gov.co/apc-aa-files/40743db9e8588852c19cb285e420affe/Conpes_3567_de_2009.pdf)

Departamento Nacional de planeación. (2012). Conpes 3723. Importancia estratégica del proyecto denominado fortalecimiento de la acción contra minas en Colombia, desarrollado con la cooperación financiera no reembolsable de la Union Europea. Recuperado de:  
[http://portalterritorial.gov.co/apc-aa-files/40743db9e8588852c19cb285e420affe/Conpes\\_3723\\_de\\_2012.pdf](http://portalterritorial.gov.co/apc-aa-files/40743db9e8588852c19cb285e420affe/Conpes_3723_de_2012.pdf)

Dirección de Acción Integral Contra las Minas Antipersonal –Descontamina Colombia. (s.f). Estadísticas de Desminado. Recuperado de:

Descontamina Colombia – DAICMA. (2016). Plan Estratégico de Acción Integral contra Minas Antipersonal 2016-2021. Colombia libre de sospecha de Minas Antipersonal a 2021. Recuperado de:  
<http://www.accioncontraminas.gov.co/direccion/Documents/Colombia-Libre-Sospecha-Minas-Antipersonal-2021.pdf>

Descontamina Colombia- DAICMA. (2018). Víctimas de minas antipersonal y municiones sin explotar. Recuperado de:  
<http://www.accioncontraminas.gov.co/estadisticas/Paginas/victimas-minas-antipersonal.aspx>

Descontamina Colombia. (2018). Operaciones para descontaminación del territorio. Recuperado de:  
<http://www.accioncontraminas.gov.co/estadisticas/Paginas/Operaciones-de-Desminado-Humanitario.aspx>

- Donais, T. (2011). ¿Empoderamiento o imposición? Dilemas sobre la apropiación local en los procesos de construcción de paz posconflictos. *Relaciones Internacionales*, num. 16.
- Durham, J; Nanhthavong, V; Sychareum, V. (2016). Explaining how unexploded ordnance clearance enhances livelihoods in the Lao PDR. Recuperado de: <http://dx.doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2015.09.005>
- Erling, K. (2008). Conceptualizing National Ownership: the case of mine action. International Peace research institute, Oslo. Recuperado de: <https://www.prio.org/Publications/Publication/?x=7218>
- Fernández, C. (1991). El emplazamiento de la memoria colectiva: crónica psicosocial. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/111757.pdf>
- Flores, M. (2007). La identidad cultural del territorio como base de una estrategia de desarrollo sostenible. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/pdf/675/67500703.pdf>
- Galaviz, T. (2013). La interacción de la confianza en los procesos de consolidación de paz. *Iberóforum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana*, vol. VIII, núm. 16, julio-diciembre, 2013, pp. 35-66. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/pdf/2110/211030706002.pdf>
- Galtung, J. (1998) *Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución. Afrontando los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia*, Bilbao, Gernika Gogoratuz
- García, C. (2006). Las representaciones sociales del territorio. En. *Controversia* no. 186, Bogotá: CINEP
- García, C y Aramburo, C. (2011). *Geografías de la guerra, el poder y la resistencia. Oriente y Urabá antioqueños 1990-2008*. Editorial odecofi. Colombia.
- Gobierno de la República de Colombia. (16 de marzo de 2017). Está en construcción una biblioteca con atención integral para la primera infancia en Briceño, Antioquia. Recuperado de: <http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/2017/Paginas/Esta-en-construccion-una-biblioteca-con-atencion-integral-para-la-primera-infancia-en-Briceno-Antioquia.aspx>

- Gobierno de la República de Colombia y FARC-EP, 2016. “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” Recuperado de: <http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf>
- Hérin, R. (2006). Por una geografía social crítica y comprometida. *Revista Electrónica De Geografía Y Ciencias Sociales*. Universidad de Barcelona. Vol. X, núm. 218 (93). Recuperado de: <http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-218-93.htm>
- Hofman, C. (2006). Engaging non-state armed groups in Humanitarian Action. Recuperado de: [https://www.die-gdi.de/uploads/media/Hofmann\\_NSAG.pdf](https://www.die-gdi.de/uploads/media/Hofmann_NSAG.pdf)
- Hofman, O. (2001). Acerca de la fragilidad de los espacios públicos. En: Valencia, A (Ed.). Exclusión social y construcción de lo público en Colombia. Universidad del Valle.
- Ibarra, K. (2016). El confinamiento de la población civil, obligaciones y responsabilidad del estado colombiano. Tesis o trabajo de investigación presentada(o) como requisito parcial para optar al título de Magister en Derecho. Recuperado de <http://www.bdigital.unal.edu.co/54998/1/karenjohannaibarraarcos.2016.pdf>
- Insight Crime. (2013). BACRIM recurren a minas interpersonal en Colombia. Recuperado de: <https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/bacrim-recurren-a-minas-antipersonales-en-colombia/>
- International Campaign to Ban Landmines – Cluster Munition Coalition (ICBL-CMC). (2017). Landmine Monitor 2017. Recuperado de: [http://www.the-monitor.org/media/2615219/Landmine-Monitor-2017\\_final.pdf](http://www.the-monitor.org/media/2615219/Landmine-Monitor-2017_final.pdf)
- Jaramillo, S. (2014). La paz territorial. Discurso pronunciado en la Universidad de Harvard el 13 de marzo de 2014 en calidad de Alto Comisionado para la Paz. Recuperado de: <http://equipopazgobierno.presidencia.gov.co/prensa/declaraciones/Paginas/paz-territorial-sergio-jaramillo-alto-comisionado-paz-proceso-paz.aspx>
- Lederach, J.P. (2007). Construyendo la paz. Reconciliación sostenible en sociedades divididas. Editorial Códice, Bogotá.
- Lederach, J.P. (2009). El pequeño libro de transformación de conflictos.



- Lederach, J.P. (2016). La imaginación moral. El arte y el alma de la construcción de paz. Semana Libros, Bogotá.
- Lefebvre, H. (2013). La producción social del espacio. Capitan Swing, España.
- López, J. (2013). Las minas antipersonal en el proceso de restitución de tierras. Recuperado de: <http://repositorio.uniandes.edu.co/xmlui/handle/1992/10697>
- MacLean, K. (2016). Humanitarian mine action in Myanmar and the reterritorialization of risk. Recuperado de: <https://www.berghahnjournals.com/view/journals/focaal/2016/74/focaal740107.xml?rskey=8AQEos&result=8>
- Maldonado, D. (2018). La participación ciudadana en la construcción de la paz territorial en Colombia. Recuperado de: [http://redprodepaz.org.co/sabemos-como/wp-content/uploads/2016/05/5\\_La-participacion-ciudadana-en-la-construccion-de-la-paz-territorial-en-Colombia.pdf](http://redprodepaz.org.co/sabemos-como/wp-content/uploads/2016/05/5_La-participacion-ciudadana-en-la-construccion-de-la-paz-territorial-en-Colombia.pdf)
- Mejía, R. (2016). Afectaciones socioterritoriales asociadas al desplazamiento forzado a causa del conflicto armado en el municipio de San Francisco, oriente antioqueño, 1997-2012. Tesis para optar título de Magister en estudios Urbano – Regionales. Recuperado de: <http://www.bdigital.unal.edu.co/57168/1/71782217.2016.pdf>
- Mesa de Conversaciones. (2015). Plan Piloto de Desminado conjunto inicia en Antioquia y Meta. Comunicado conjunto número 53. La Habana. 8 de marzo de 2015. Recuperado de: <http://www.accioncontraminas.gov.co/prensa/2015/Paginas/150327-A-Comunicado-Conjunto-53-La-Habana-27-de-marzo-de-2015.aspx>
- Millard, A y Berg Harpviken, K. (2001). Community studies in practice. Implementing a new approach to landmine impact assesment with illustrations form Mozambique. Recuperado de: <https://www.prio.org/Publications/Publication/?x=7217>
- Möllering, G. (2001). The nature of trust: from George Simmel to a Theory of Expectation, Interpretation and suspensión. Sociology Vol. 35, No. 2, pp. 403–420. Printed in the United Kingdom © 2001 BSA Publications Limited
- Moreno, P. (2017). El reto de la construcción de confianza y la convivencia en el territorio. Conferencia sobre paz territorial. Recuperado de: <http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Prensa/Paginas/2016/febrero/Conferencia-internacional-sobre-paz-territorial.aspx>

- Oslender, U. (2008). Geografías del terror: un marco de análisis para el estudio del terror. *Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales*, Universidad de Barcelona, vol. XII, núm. 270 (144), agosto.  
<http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-20.htm>
- Osorio, F. (2009). *Recomposición de territorios en contextos de guerra. Reflexiones desde el caso colombiano. Memorias del Seminario Territorialidades rurales en el siglo XXI*. Editorial Javeriana. Bogotá.
- Ospina, B. (2014). Reconfiguración de prácticas espaciales: análisis socioespacial a los procesos de desplazamiento y retorno campesino. *Ánfora*, 21(37), 151-177. Universidad Autónoma de Manizales.
- Oviedo, E y Abogabir, X. (2000). Participación ciudadana y espacio público. En: Segovia, O y Dascal, G (Eds.). *Espacio público, participación y ciudadanía*. Ediciones Sur, Santiago de Chile
- Paffenholz, T y Spurk, C. (2006). Civil Society, Civic Engagement, and Peacebuilding. En: *Social Development Papers, Conflict prevention & Reconstruction*. Recuperado de: [http://siteresources.worldbank.org/INTCPR/Resources/WP36\\_web.pdf](http://siteresources.worldbank.org/INTCPR/Resources/WP36_web.pdf)
- Paffenholz, T. (2015). Civil society and peacebuilding. Recuperado de: [http://www.daghammarskjold.se/wp-content/uploads/2016/01/DHF\\_DD63\\_p108-118.pdf](http://www.daghammarskjold.se/wp-content/uploads/2016/01/DHF_DD63_p108-118.pdf)
- Pérez, M. (2004). La conformación territorial en Colombia: entre el conflicto, el desarrollo y el destierro. *Cuadernos de Desarrollo Rural* (51).
- Programa Presidencial para la Acción contra Minas Antipersonal (PAICMA). (2014). *Normatividad de la Acción Integral contra Minas Antipersonal en Colombia*. Recuperado de: <http://www.accioncontraminas.gov.co/prensa/Documents/Normatividad%20AICMA%202014.pdf>
- Raciti, I. (2006). The political dimension of humanitarian action. Rethinking the humanitarian space. Recuperado de: <http://revistaderechoshumanos.revistas.deusto.es/article/view/1133>
- RCNRadio.com. (2018). Incautan 44 minas antipersonal a las disidencias de las Farc en San Vicente del Caguán. Recuperado de: <https://www.rcnradio.com/colombia/pacifico/incautan-44-minas-antipersonal-las-disidencias-de-las-farc-en-san-vicente-del>

- Roberts, R y Littlejohn, G. (2005). Maximizing the impact. Tailoring mine action to development needs. Recuperado de:  
<https://www.prio.org/Publications/Publication/?x=7296>
- Romero, Y. (2006). Desplazamiento y reconstrucción del tejido social en el barrio de Altos de la Florida. *Revista tendencias y retos*.
- Saiz, J. (2007). Capital social: una revisión de concepto. Recuperado de:  
<https://core.ac.uk/download/pdf/7082270.pdf>
- Salas, L. (2015). Lógicas territoriales y relaciones de poder en el espacio de los actores armados: un aporte desde la geografía política al estudio de la violencia y el conflicto armado en Colombia, 1990-2012. *Revista Colombiana de Geografía*. Vol.24, no.1, enero-junio de 2015.
- Santos, M. (1997) *Metamorfosis del espacio habitado*. Oikos Tau. Barcelona.
- Santos, M. (2000). *La naturaleza del espacio. Técnica y tiempo. Razón y emoción*. Editorial Ariel, S.A. Barcelona.
- Scheu, H. (2002) "Humanitarian Mine Action in Mozambique," *Journal of Mine Action*: Vol. 6 Iss. 2, Article 8. Recuperado de:  
<http://commons.lib.jmu.edu/cisr-journal/vol6/iss2/8>
- Skara, B. (2003). Risky bussiness or constructie assistance? Community engagement in humanitarian mine action. *Third world Quarterly*, Vol24, No5.
- Soja, E. (2010). *Seeking spatial Justice*. Minneapolis University of Minnesota Press.
- Soto, P [Ed.]. (2013). *Cuerpos, espacios y emociones: aproximaciones desde las ciencias sociales*. Recuperado de  
<http://www.scielo.org.mx/pdf/polis/v10n1/v10n1a7.pdf>
- SWISSPEACE y Centro Internacional de Desminado Humanitario de Ginebra. (2016). *La acción contra las minas antipersonal y la mediación de paz*. Recuperado de:  
[http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user\\_upload/Media/Publications/Journals\\_Articles/Publications\\_by\\_staff/GICHD\\_Mine\\_Action\\_and\\_Peace\\_Mediation\\_esp\\_web.pdf](http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Journals_Articles/Publications_by_staff/GICHD_Mine_Action_and_Peace_Mediation_esp_web.pdf)
- Sztompka, P. (2001). *Th culture of trust and the functions of trust*. En: *Trust: A sociologic theory*. Cambridge University Press.

- Toro, A; y Rodríguez, M. (2001). La comunicación y la movilización social en la construcción de bienes públicos. Documento de trabajo del Indes.
- Velásquez, E y Peña, L. (2005). Geografías del conflicto en Colombia: base para la política territorial y la construcción de paz. Recuperado de: <http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal10/Geografiasocioeconomica/Ordenamientoterritorial/63.pdf>
- VerdadAbierta.com. (2015). Las víctimas silenciosas de las minas antipersonal. Recuperado de: <https://verdadabierta.com/las-victimas-silenciosas-de-las-minas-anti-persona/>
- Vidal, D. (2015). Pensar la formación para la ciudadanía en clave espacial. Una lectura comprensiva de David Harvey y Doreen Massey. Revista Colombiana de Sociología, 38(1), 165- 182.
- Zusman, P. (2002). Milton Santos: su legado teórico y existencial (1926-2001). Recuperado de: <https://www.raco.cat/index.php/DocumentsAnalisi/article/viewFile/31765/31599>

## ANEXOS

### Anexo 1. MATRIZ DE ANÁLISIS SOCIO ESPACIAL

**Imagen 1: Matriz tentativa de análisis socio espacial**



Fuente: Elaboración propia.

274

Tomado de: Álvarez, A. (2013). (Des)Igualdad sociespacial: nociones clave para una lectura crítica de la ciudad.

Este esquema da cuenta de la forma en que se concibe la realización de ciertos derechos y dinámicas sociales a través del espacio como productor de justicia. En esta medida, las condiciones geográficas, territoriales y paisajísticas de los lugares en que vivimos representan una serie de posibilidades o limitantes al ejercicio de nuestros derechos.

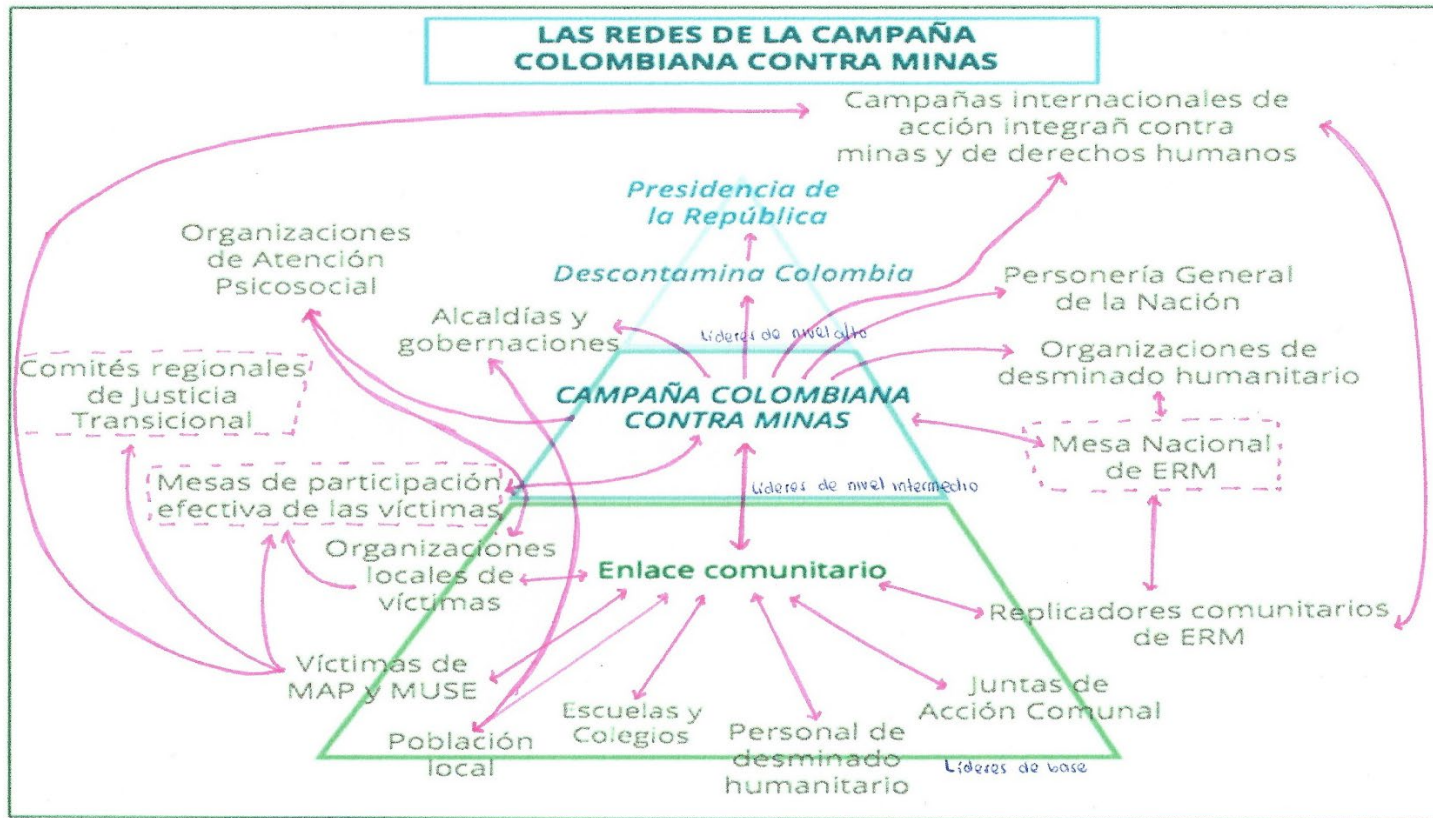
## Anexo 2. CLASIFICACIÓN DE LOS MUNICIPIOS POR GRADO DE AFECTACIÓN



Tomado de: Descontamina Colombia. Plan Estratégico 2016-2021. Disponible en: <http://www.accioncontraminas.gov.co/direccion/Paginas/Plan-Estrategico-2016-2021.aspx>

Los 199 municipios tipo I, tienen alta afectación ya que concentran el 75.6% de los accidentes ocurridos en Colombia entre 1990 y 2015. Los 291 municipios del tipo II, son aquellos que no han presentado accidentes con MAP y MUSE durante los últimos cinco años, pero cuentan con reportes de accidentes antes del 2010. Los 183 municipios tipo III muestran una baja afectación: no tienen registrados incidentes, pero se han presentado desminado militar o incautaciones de minas a GAI. Finalmente, los municipios tipo IV no presentan ningún registro de afectación o eventos relacionados (Descontamina Colombia, 2016).

Anexo 3. ESQUEMA DE REDES DE LA CCCM




Fuente: Elaboración propia con base en las menciones más frecuentes en las entrevistas realizadas de organizaciones o conexiones a nivel local, regional, nacional e internacional.

En esta medida es un esquema simple del tipo de conexiones que se dan a partir de la metodología usada por la CCCM. El flujo de las flechas demuestra que la intención es acercar a las comunidades a espacios decisorios y participativos e incluso instancias internacionales en las que su experiencia pueda ser visibilizada.



# Anexo 4. CAJA DE HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN Y COORDINACIÓN TERRITORIAL DE ACCIÓN INTEGRAL CONTRA LAS MINAS




## CAJA DE herramientas

PARA LA GESTIÓN Y COORDINACIÓN TERRITORIAL


# DE AICMA

### DIRECCIÓN PARA LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL




- 1** Priorice territorios con presencia de múltiples organizaciones y con comités territoriales de minas.
- 2** Considere dificultades de acceso, al asignar los territorios a cubrir por un solo gestor y al establecer el presupuesto de operación del proyecto.
- 3** Genere herramientas de conexión emocional y personal con el flagelo de MAP/MUSE/AEI para motivar la voluntad de las autoridades territoriales.
- 4** Desarrolle estrategias para que las comunidades se apropien e incidan en la toma de decisiones de Aicma.
- 5** Amplíe la gestión territorial más allá del CJT y la Alcaldía o Gobernación. Incluya a las ONG, OING y OIG, además de los sistemas de educación y salud, a las víctimas y líderes comunitarios, entre otros.
- 6** El gestor departamental debe ser el engranaje entre la nación y el territorio. En las subregiones cuya dinámica o contexto sea de mayor complejidad, asigne un gestor municipal que responda al nivel departamental.
- 7** Fortalezca el perfil del gestor en educación, experiencia y habilidades. Debe conocer el territorio, tener experiencia humanitaria y habilidades para las relaciones públicas.
- 8** Remunere a los gestores de acuerdo con su perfil y responsabilidades y provea todas las herramientas que requieren para su trabajo (equipos, software, material institucional, etc.).
- 9** Construya vínculos de corresponsabilidad con las administraciones municipales, para que nombren un enlace de minas específico y le provean de lo necesario para su gestión.
- 10** Articule su acción municipal a través del enlace de minas nombrado por el municipio, según un perfil propuesto por Daicma.
- 11** Defina claramente el rol de los gestores. Bríndele su respaldo político y técnico, y la información necesaria para que representen a Daicma en todos los escenarios territoriales.
- 12** Visite los territorios departamentales y municipales, tanto urbanos, como rurales.
- 13** Capacite periódica y presencialmente a los gestores territoriales y enlaces municipales en: Aicma, planeación territorial, incidencia y comunicación, gestión de información.
- 14** Implemente procesos de gestión de información (como el levantamiento del estado del arte) y de incidencia en políticas públicas adaptados a cada territorio (como las rutas pedagógicas y técnicas para la actualización de planes territoriales) como elementos básicos de la gestión territorial.
- 15** Mantenga una doble orientación procesos-productos en los procesos de planeación local para Aicma, pues el proceso de creación de confianza y articulación con las entidades, es incluso más importante que el plan en sí mismo.
- 16** El presupuesto de operación del proyecto debe atender a las necesidades de movilidad, gestión de información y participación.

### ADMINISTRACIONES TERRITORIALES



- 1** Nombre un funcionario competente para hacer el rol de enlace de minas específicamente, según perfil sugerido por la Daicma.
- 2** Facilite el trabajo del enlace de minas, permitiéndole los espacios para capacitarse, reunirse, visitar el territorio.
- 3** Participe de los espacios de gestión propuestos por Daicma, facilitando la convocatoria de las entidades, la entrega de información y la planeación de Aicma.
- 4** Apoye la gestión de Aicma con recursos logísticos y operativos para el gestor territorial, tales como vehículo, equipos, espacios físicos de trabajo, entre otros.
- 5** Implemente sistemas de información, según estándares del Daicma, y comunique las acciones adelantadas en Aicma en el territorio, al departamento y a Daicma.
- 6** Fortalezca sus planes de prevención, atención y contingencia en los componentes Aicma, con el fin de prepararse para un desminado humanitario.
- 7** Comprométase con el registro y seguimiento de los accidentes e incidentes y la atención brindada.
- 8** Asegure la estabilidad de los representantes de los distintos miembros del CJT, así como la regularidad y previsibilidad de sus reuniones.
- 9** Promueva la creación de comités territoriales de minas y mesas de víctimas de minas en su territorio. Participe activamente de los comités existentes.

### GESTORES



- 1** Amplie sus conocimientos específicos sobre Aicma y Derechos Humanos.
- 2** Conozca a fondo los mecanismos de la Ley de Víctimas, así como las distintas normas relativas a Aicma.
- 3** Construya confianza con los actores territoriales desde un lenguaje neutral, incluyente y colaborativo: "nosotros haremos".
- 4** Haga presencia permanente en los distintos espacios de participación territorial, como mesas de víctimas, comités de minas, comités de justicia transicional, comités de derechos humanos, etc.
- 5** Sea flexible, su disponibilidad para acordar espacios de trabajo con las autoridades es fundamental para avanzar en su agenda de gestión.

- 6** Articule todas las acciones en el territorio a través del enlace territorial de minas o quién haga su veces.
- 7** Manténgase informado sobre la realidad del territorio. Conozca la agenda política territorial, así como la programación de actividades.
- 8** Estudie a fondo y con detalle los planes territoriales y esté atento a sus cambios y actualizaciones.
- 9** Genere alianzas y redes con las organizaciones nacionales e internacionales con presencia en el territorio, construyendo agendas conjuntas, visitando las zonas rurales y generando espacios de participación.
- 10** Reúna a las autoridades y a las víctimas en distintos espacios de sensibilización y participación.
- 11** Realice reuniones periódicas bilaterales y multilaterales con los actores con incidencia en Aicma en el territorio, particularmente con los enlaces territoriales de víctimas o minas, las secretarías de gobierno y la personería.
- 12** Adelante mesas de trabajo y reuniones uno a uno con cada una de las instituciones que participan del Comité de Justicia Transicional y del Comité de Minas.
- 13** Incluya en su gestión a las asociaciones de víctimas, las juntas de acción comunal, el sistema educativo y sistema de salud.
- 14** Recorra y visite las zonas rurales, hable con las comunidades.
- 15** Apoye la operación y coordinación de las actividades de Aicma en el terreno, las propias y las de otras organizaciones.
- 16** Acompañe a los voluntarios de Aicma existentes en el territorio, preséntelos a las autoridades e inclúyalos en las actividades de formación y participación.
- 17** Trabaje en equipo con otros gestores territoriales, comparta sus experiencias y aprendizajes, principalmente con aquellos que están su mismo departamento o región.
- 18** Comparta su conocimiento Aicma con otras organizaciones, especialmente con aquellas como las organizaciones de víctimas, las organizaciones comunitarias y las juntas de acción comunal.
- 19** Mantenga permanente comunicación acerca de los avances de su gestión con los niveles de coordinación departamental o nacional, según sea su caso.
- 20** Entregue puntualmente sus reportes, con información clara dando cuenta del trabajo realizado, sus resultados y las acciones de seguimiento que realizará. De respuesta a las recomendaciones.
- 21** Registre y conserve evidencia de la gestión realizada, combine los medios informales (teléfono, chat y correo electrónico) con medios oficiales como cartas y actas de reuniones.

Tomado de: AICMA Colombia. [http://www.aicmacolombia.com/wp-content/uploads/2014/09/Resultados\\_del\\_proyecto\\_infografia1.png](http://www.aicmacolombia.com/wp-content/uploads/2014/09/Resultados_del_proyecto_infografia1.png)

Anexo 5. ESQUEMA DE IMPACTOS EN EL ESPACIO A TRAVÉS DE LOS TRABAJOS DE DESMINADO HUMANITARIO DE LA CCCM

Configuración Territorial (sistema de objetos)	Dinámicas sociales (sistema de acciones)
Destrucción de límites impuestos por las Minas Antipersonal (objetos artificiales) que configuraban el territorio desde lógicas violentas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prácticas                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Estímulo a proyectos propios y dinámicas económicas con impacto en lo local.</li> <li>○ Recuperación de espacios de interacción</li> <li>○ Planteamiento de nuevos usos del espacio</li> <li>○ Nuevas prácticas seguras adoptadas a través de la ERM</li> </ul> </li> </ul>
Cambio en las posibilidades de acción de las personas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visiones sobre el espacio                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Entregas simbólicas del territorio</li> <li>○ Procesos de apropiación local mediante la incidencia política</li> <li>○ Cambio en la expresión de la disputa por las distintas miradas sobre el territorio.</li> </ul> </li> </ul>

Fuente: Elaboración Propia.

Anexo 6. ENTREVISTA KATHERINE OTÁLORA. (17 DE ABRIL DE 2018).

Reducir el riesgo en otras personas bombas nucleares y municiones en racimo y robots asesinos. Reunión de los Estados firmantes del Convenio de Ottawa por los 16 años de firma, entre foro de líderes mujeres jóvenes en desarme.

Enlace comunitario es una figura, una persona o un grupo de personas, que entran en el territorio antes durante o después de que una campaña u organización quiere realizar una actividad como el desminado humanitario, entonces el objetivo ahí es como realizar un puente entre la comunidad y la organización para generar un tejido de confianza. Que la comunidad sienta que no se llega a invadir su territorio, sino que se tiene un objetivo y que ese objetivo final es a largo plazo poder entregarles esas tierras libres y que se pueda

generar algo productivo para ellos que se puedan poder aprovechar esas tierras que antes se encontraban muertas o que generaron desplazamiento o algo así.

Siempre se trabaja con personas que sean del mismo territorio, que conozcan ya y sean de allá. Entonces lo que hace campaña es comunicarse con alguien que sea de ese territorio, de esa comunidad, que ya conoce el territorio y que no sea tan difícil llegar a esas personas porque ya tienen confianza o es un líder comunitario o es un docente que lo conocen y lo quieren mucho o es el vecino que toda la vida ha sido representante de la Junta de Acción Comunal. Entonces se llega con esas personas, se habla con ellos desde acá y cuando ellos aceptan, le comentan a su comunidad, y si ellos están de acuerdo se le da permiso a la organización y se entra. Lo importante es siempre trabajar con alguien del mismo territorio, no alguien de Bogotá que llegue a hacerlo todo. En las veredas se hace con los representantes de la Juntas de Acción Comunal.

La campaña durante su creación hace 17 años siempre ha trabajado en la mayoría de los departamentos, aunque no se tengan proyectos en esa área si se tiene un coordinador o un contacto que es del territorio y que ha sido voluntario o cooperador previo de la campaña entonces es con esos contactos que se comienza a hacer el enlace. Y para hacer el proceso de desminado en este momento la CCMM tiene asignada trece áreas para desminado en 12 municipios, en esos municipios se contacta alguien territorial y se hace el enlace previo a

Puede darse que las comunidades no quieren que se acceda a su territorio, si esto pasa lo que se hace es persuadir intentar, contarles el proceso, intentar por todos los medios posibles para poder acceder y si no se puede, se firma un acta donde la comunidad diga que por cuestiones comunitarias no permiten el acceso.

La campaña invita a las personas del terreno a espacios como el Comité de Justicia Transicional, el Comité de Reparación y entonces se hace parte de esas reuniones. O digamos que a veces hay una actividad en el campo, pues digamos, hay una mina, entonces muchas veces los que están trabajando en el terreno hacen parte de esas actividades solamente teniendo en cuenta ese principio de neutralidad e imparcialidad, si es un campeonato de fútbol, se ha participado en uno así de recocha porque la confianza se construye en esos espacios así, con actividades normales. En el Meta, por ejemplo, estaban organizado un torneo e invitaron a la campaña a hacer un partido amistoso y se organizó un grupo de doce mujeres jugando, eso sí sin utilizar camisetas de ningún equipo, y así en

actividades que inviten autoridades locales o las JAC y uno crea que puede participar sin afectar a la comunidad, porque por ejemplo no se participa en campañas políticas.

El desminado, primero se habla con la comunidad y ellos mismos son los que nos dan la información a nosotros, nos dicen como “en la finca de Pepito el año pasado ocurrieron dos accidentes, entonces creemos que es prioritario empezar con esa finca”. Se empieza es por donde ellos nos digan, ellos priorizan su propio territorio porque ellos son los que conocen del tema, donde están los accidentes; y hay comunidades, sobre todo en los cabildos que tienen sus propias normas que a veces son muy reacios a que alguien entre. Entonces lo que se hace es mirar líderes comunitarios que voluntariamente quieran formarse primero en temas de prevención y educación en riesgo de minas, y lo que se hace es trabajar con ellos. Se forman y luego entran de nuevo a su territorio y son los que multiplican la información, al menos para que se conozcan los comportamientos seguros que deben tener en el área y se reduzca el riesgo de accidentes mientras se alcanza a entrar.

El fin de semana estábamos en una vereda, y una persona nos contó que se encontró muchos casquillos de bala que esos son municiones sin explotar, y él nos contó que hizo un hueco en la tierra, las cogió todas y les echó sal para que no tuvieran efecto y eso es mentira porque la sal no disminuye el efecto que puede tener el artefacto.

Lo mismo pasa con el fuego, mucha gente dice que cuando quema un campo ya explotan las minas entonces ya no sirven y ya puedes caminar por ahí tranquilamente, pero tampoco. Es un mito, eso no es cierto. Por ejemplo, durante los talleres de ERM, de educación ellos de una vez empiezan a hablar de los mitos y no falta la persona que levanta la mano y diga “ay no, pues yo tengo una granada en mi casa” o algo así, eso son cosas que pasan, pero es porque la gente no conoce. Lo de la sal es muy común o lo que dicen de “yo mando primero a mi perro y si él pasa yo paso”, ellos tienen muchos mitos porque las MAP nunca pierden su capacidad a menos que se desactiven por medio de los desminados.

Se trabaja en educación por emergencia, entonces por ejemplo si ocurre un accidente y hay que intervenir ya para que no vuelva a suceder se convocan a las personas, con la JAC, se les dice que en el salón se van a dar reunir, que se va a hacer un taller para la prevención la gente va, hacen preguntas, pero también se trabaja en los colegios, en el ámbito educativo y hay veces que los líderes de las mismas comunidades solicitan a través de otras organizaciones o de la personería que ellos creen que necesitan la información,

eso llega a Descontamina Colombia y ellos contactan a la organización que esté más cerca de ese territorio para que hagan la prevención.

Cuando se hace el enlace uno de las cosas que se hace es que la gente que va a trabajar en las fases de desminado humanitario, estudio no técnico y despeje, esas personas son del territorio lo que se hace ahí es contratar gente del territorio y no solamente se está dando oportunidades laborales sino que también se da espacio para que ellos desarrollen capacidades, y por otro lado, también cuando se hacen la compra de mercado, papel higiénico, la verdura, lo que se intenta es que sea con la misma comunidad para estimular su economía.

Eso es difícil porque algo que se tiene claro desde las organizaciones siempre es que uno entrega un territorio libre de sospechas, pero eso no puede garantizar que esté totalmente limpio. La confianza con las personas se da con el tiempo, podemos llevar un año haciendo operaciones, ya se despejó un área, pero faltan varias, pero hay alguien de la comunidad que va y dice “pero yo me acuerdo que allá en ese lado había otra” entonces toca volver. A la comunidad le lleva mucho tiempo tener la confianza en la organización porque siempre tienen esa perspectiva de que vienen con el gobierno, vienen a robarnos, solo vienen acá por su tierra y vuelven y se van, entonces eso es muy difícil.

Por eso es importante fortalecer el enlace comunitario y decirles a las personas que es humanitario que objetivo no es destruir sus tierras sino al contrario construirlas y que ellos puedan volver a aprovecharlas, y pues se han entregado tierras, y pues las personas no es que entren directamente a usarlas sino que como un proceso lento, pero digamos que desde la campaña en Algeciras (Huila) se trabaja con una organización de víctimas, entonces esas personas tienen sus propios proyectos productivos pequeños de que una huerta o un cultivo y pues eso se intenta apoyar para que se puedan tener recursos u orientando a la persona para que sepa dónde puede aplicar o que pueda hacer, cosas así pero si es un proceso muy difícil que esas personas digan “no, ya vino la Campaña, limpió, me voy a meter ahí”.

En el área de asistencia a víctimas se trabaja con asociaciones de sobrevivientes, se apoya en información sobre el acceso a la ruta de proceso de víctimas que es el proceso desde cómo se reporta un accidente hasta como se accede a citas. Aquí cuando se tienen recursos suficientes se compran ayudas para el proceso de rehabilitación que son como los bastones, las muletas, y se lo entregan a las personas y con las organizaciones. Hay un

caso de unas mujeres en Arauca que son solo mujeres, pero tienen orientación a hacer un proyecto productivo y están puestas en eso. Se hace ayuda humanitaria complementaria que es apoyarlas en recursos económicos para que asistan a esas citas médicas o para su acompañante cuando se puede, es de acuerdo a las personas que se pueda. Normalmente es constante acompañar a una persona desde que inicia el proceso.

[Para apoyo psicosocial] se buscan organizaciones que son especialistas en la rehabilitación y en el acompañamiento, porque digamos que aquí hay una persona encargada o los coordinadores orientan a las víctimas hasta hacerlas llegar a las organizaciones que son expertas en el tema, porque pueden llegar y decirle sin saber qué hacer. Se es intermedio en el apoyo psicosocial en el proceso de rehabilitación.

En términos de comunicación con la Alcaldía existe una ruta municipal de atención a las víctimas y también para la gestión del riesgo, entonces, la gracia es que afuera de la Alcaldía o de la Personería o las instituciones públicas se pega este afiche que tiene el contacto de las personas de acuerdo a lo regional, es la ruta que se utiliza para el contacto desde el territorio o a lo nacional y que deben hacer los familiares y las víctimas directas.

La idea es empezar a incidir en el tema de las otras armas en Colombia con organizaciones y campañas internacionales.

Hay un enlace con otras campañas cuando se comparte territorio, lo que se intenta es compartir información. Por ejemplo, si en un territorio está Campaña y Handicap, y ellos están haciendo desminado, pero no tienen recursos para asistencia a víctimas, entonces se contactan con campaña y dicen “identificamos dos víctimas, nos pueden ayudar con eso” o “hubo un accidente, ¿pueden intervenir ustedes?”. Es más, de cooperación. Incluso se trabaja con organizaciones como Pastoral Social en Nariño y Caquetá, y lo que se hace es trabajar en un proyecto conjunto. Entonces ellos se encargan de educación y Campaña entra a formar a las personas para que hagan capacitación e incidencia política por ejemplo con la implementación del PLAIMA, que son los Planes Integrales contra Minas Antipersonales, para que si hay en un municipio se actualice, o si no se cree y se tenga un manejo para mitigar el riesgo por minas.

Ahí es que se participa en lo regional en ese Subcomité de reparación, no repetición y Justicia transicional, entonces lo que hacen los coordinadores departamentales es ir y buscar un espacio en la agenda para tratar los temas de desminado. Normalmente es muy

difícil tener tiempo suficiente para hablar sobre todos los problemas, entonces lo que se hace es insistir constantemente para construir matrices del problema, mostrarlo y mirar cómo se debe incluir el tema de acción contra minas en los planes. Pero generalmente toma mucho tiempo, porque en el comité suelen dejarlo como el último tema, dan como 20 minutos y la gente ya se ha ido desde antes, entonces es un proceso largo y constante.

Con brigadas militares no hay coordinación, puede que a veces los habitantes nos cuenten lo que pasa o que hagan como informes públicos, pero como nosotros somos ayuda humanitaria, hablar con militares puede dañar muy fácilmente la relación con el enlace comunitario por todo lo que significan instituciones como esa en las regiones.

Hay por ejemplo un sobreviviente que tuvo el accidente en Caquetá, luego de su proceso de recuperación se vinculó a la Campaña y logró hacer parte del equipo de Estudios no Técnicos en Algeciras, Huila, y en el acompañamiento a sobrevivientes y en el estudio no técnico trabaja con prótesis y todo, va y se mete al territorio. A veces lo invitan a nivel nacional a hacer charlas y conseguir recursos para que cuente su experiencia.

Hay una muchacha que también tuvo amputación, tiene un hijo y es miembro de una asociación de víctimas de Norte de Santander y que ha tenido reconocimiento y participado en conferencias internacionales y tuvo oportunidad de ir a contar su experiencia en las Coordinaciones nacionales, y por ejemplo ella siempre ha insistido que las actividades de Cooperación internacional para la ayuda humanitaria no se hacen para los sobrevivientes, sino con los sobrevivientes.

La Campaña ha ayudado a empoderar a las personas en las comunidades, a reconocer sus opiniones, a apoyar las ideas y los procesos que tienen y poder brindar espacios de participación. Por ejemplo, a una asociación de víctimas en Algeciras que no tenían Cámara de Comercio ni registro se le dio orientación y se le ayudó con contactos para que se pudieran formalizar y no fueran solo una organización de palabra. O se da apoyo en proyectos propios, como el caso del padre de Antioquia, un líder comunitario, que decidió comenzar a recorrer su territorio voluntariamente para hacer ERM.

#### Anexo 7. NOTAS DE CAMPO VISTAHERMOSA

Los siguientes relatos se recogieron como resultado de una visita al municipio de Vista Hermosa, Meta, el 11 de Julio de 2018. Por el contexto en el que se dieron, son relatos

cortos que responden a preguntas puntuales que se realizaban en los cortos momentos de encuentro.

-Relatos habitante Vistahermosa

No, pues con el tema del desminado acá no ha habido mucho problema, uno sabe que vienen y trabajan bien. Pero es que todas esas cosas se manejan es desde el Consejo comunitario y allá no siempre quieren que uno esté o que uno se entere porque de pronto uno no tiene el mismo punto de vista, entonces uno se cansa porque allá piden favores o se manejan mal los recursos y toca estar bien con eso. Yo sé que con los que están haciendo el desminado por allá antes hubo un problema porque cuando comenzaron a coger gente para trabajar, todos fueron de la misma vereda, sabiendo que hay otras personas de otras zonas que también necesitan el trabajo. Entonces al principio se dijo que por qué todos habían salido de ese sector si es que se iba a trabajar una zona más grande, pero pues explicaron que sí, que de pronto había sido un error no hacer el proceso más amplio pero que necesitaban era comenzar a capacitar rápido a la gente y se quedó en eso.

Por ejemplo, yo vivo acá, ¿sí? Pero por allá al otro lado yo tengo una parcela y hay mucha gente que allá tiene sus parcelas y tienen su tierra para cultivar o sus casas incluso, y cuando aquí se hacían los combates allá estaban las guerrillas y acá estaba el Ejército y los paramilitares, entonces uno no podía cruzar y muchas de esas tierras quedaron abandonadas. Yo iba de vez en cuando a trabajarle, pero es que eso era arriesgarse mucho. Y yo sé que por allá habían unas de esas minas, de esas bombas, entonces tocaba estar como con mucho cuidado cuando se iba por allá. Además, allá ponían de esas minas que tenían como activación a distancia y si ellos veían que era una persona por decir algo, específica las detonaban. Así le pasó a un muchacho que luego de un tiempo, l era muy juicioso, y todos lo conocían acá, pero luego se metió al Ejército y todos sabían cuando iba pasando por allá en un carro y apenas pasó “bum” detonaron esa cosa y lo mataron, porque era del Ejército y eso se sabía que allá tenían de eso, la familia de él toda se fue.

—  
-Relatos habitante de Alto Guapaya.



Esa colina ya está toda desminada. Con eso no hemos tenido problema, ellos vienen y van haciendo los recorridos y uno sabe por dónde encontraron minas.

Eso antes era un peligro, cuando yo mandaba a mi hijo al colegio le decía que no se fuera a salir del camino, que si quería orinar o tenía que hacer popó o algo así lo hiciera ahí en la mitad pero que no se le ocurriera alejarse del camino porque uno no sabía que podría haber por ahí. Ya ahorita que uno sabe que vinieron, pues uno igual tiene cuidado, pero es una tranquilidad muy grande saber que ya están quitando esas cosas.

Que antes uno tenía que moverse como todos en filita donde uno sabía que se había estallado una cosa de esas, ay no, eso siempre daba un susto, entonces uno trata de no pasar por ahí, pero uno necesita hacer sus cosas de todos modos, ¿si me entiende?

Cuando uno encontraba una mina por ahí lo que uno hacía era dejarla ahí y avisarle a la gente que había algo raro y dónde se había encontrado, pero igual uno iba por gasolina o algo que a uno lo ayudara a quemar eso para que estallara y uno ya pudiera pasar tranquilo. Pero eso era si uno era muy valiente y veía que podía hacer algo para quitarla, porque hay otras que ni se ven.